

¡Conozcamos nuestros derechos ambientales!

Guía pedagógica para
comunidades étnicas
y campesinas



iConozcamos nuestros derechos ambientales!

Guía pedagógica
para comunidades étnicas
y campesinas

Juan José Luna Mendoza y Laura Catalina Tovar Bohórquez



¡Conozcamos nuestros derechos ambientales!
Guía pedagógica para comunidades étnicas y campesinas

Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP)

Directora general

Martha Lucía Márquez Restrepo

Subdirector de programas

Juan Pablo Guerrero Home

Coordinación del Programa Conflicto, Estado y Paz

Víctor Barrera

Coordinador de la Línea Justicia Transicional Étnica

Juan Pablo Guerrero Home

Textos

Juan José Luna Mendoza y Laura Catalina Tovar Bohórquez

Líder de Comunicaciones e Incidencia

Diana Patricia Santana Jiménez

Coordinación editorial

Edwin Parada Rodríguez

Corrección de estilo

Lorena Vides Galiano

Diseño y diagramación

Silvia Trujillo Jaramillo

Impresión

Multi-impresos S.A.S.

Cinep/Programa por la Paz

Carrera 5 n.º 33B-02

PBX: (+57 1) 245 6181

Bogotá, D.C., Colombia

www.cinep.org.co

Primera edición, mayo de 2025

ISBN: 978-958-644-376-0

Bogotá, D.C., Colombia

Impreso en Colombia / Printed in Colombia

El contenido de este libro cuenta con una licencia Creative Commons
"Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0".



-  CinepProgramaporlaPaz
-  Cinep_ppp
-  Cinep_ppp
-  Cineppppp
-  Cinep/Programa por la Paz
-  @cinep_ppp

Construido en colaboración con



Contenido

¿Por qué hablar del cuidado del medio ambiente en el Bajo Atrato chocoano y en el Urabá antioqueño?	5
--	---

A modo de introducción	5
-------------------------------	---

Los conflictos socioambientales: un tema de gran importancia	8
---	---

Liderar para defender: la importancia del liderazgo en asuntos ambientales	11
--	----

En busca de algunas herramientas para proteger el territorio: el derecho ambiental en Colombia	14
---	----

Autoridades ambientales	21
--------------------------------	----

Los recursos naturales	33
-------------------------------	----

Los bosques	38
-------------	----

La minería	41
------------	----

Delitos contra los recursos naturales e infracciones en materia ambiental	45
--	----

Entidades encargadas de conocer los delitos contra recursos naturales y de ejercer control sobre autoridades ambientales	49
--	----

Herramientas para la protección del territorio	52
---	----

Protección a líderes y lideresas	60
---	----

¿Qué es un riesgo y una amenaza?	61
----------------------------------	----

Sentencia SU-546 de 2023 y el derecho a defender derechos	61
---	----

Responsabilidades de gobernaciones y alcaldías en materia de prevención y protección	64
--	----

La Unidad Nacional de Protección (UNP)	65
--	----

Plan Nacional de Garantías	66
----------------------------	----

¡Protégeme! Y viviremos dignamente	69
---	----

Construcción de las agendas ambientales de Unguía, Riosucio y el Urabá antioqueño	69
---	----

Diagnóstico de las comunidades sobre las problemáticas en materia ambiental	70
---	----

Formulación de Acciones	73
-------------------------	----

Referencias	80
--------------------	----

Leyes y normas	82
----------------	----



¿Por qué hablar del cuidado del medio ambiente en el Bajo Atrato chocoano y en el Urabá antioqueño?

El Bajo Atrato es una subregión de Colombia ubicada en el departamento del Chocó, que conecta Suramérica con Centroamérica. El río Atrato, uno de los más caudalosos del país, recorre esta subregión, alimentado por una extensa red de ríos, ciénagas, humedales y quebradas; rodeados hace unos años por espesos bosques que albergan una riqueza de flora y fauna, y que convierten a esta región en una de las zonas con más alta biodiversidad y endemismos¹ a escala global. En este territorio, comunidades negras e indígenas han vivido históricamente; actualmente organizados en 22 consejos comunitarios y 20 resguardos indígenas.

Por su parte, la región del Urabá antioqueño es la región del departamento de Antioquia que lo conecta con el mar, en el Golfo de Urabá, uno de los accidentes geográficos más importantes del país y que

22

consejos
comunitarios

20

resguardos
indígenas

1. Este concepto se utiliza para referirse a especies animales únicas, que solo se encuentran en un territorio geográfico específico.

alberga una gran biodiversidad marina. Desde los años sesenta, esta región se convirtió en una zona estratégica en producción de banano para exportación hacia Europa y Estados Unidos; generando altos niveles de deforestación y daño a las especies de flora y fauna endémicas de esta región. La población campesina allí asentada se ha caracterizado por su trabajo en la tierra y su alto nivel organizativo, en Juntas de Acción Comunal y organizaciones territoriales que buscan defender sus derechos a la tierra.

Estas dos regiones tienen una alta importancia estratégica para el país por su ubicación y su suelo rico en nutrientes para cultivos. Esta riqueza se vio fuertemente afectada desde los años 90 con la llegada de grupos armados, narcotraficantes y empresarios, que buscaron desplazar a las comunidades étnicas y campesinas para apropiarse del territorio y así desarrollar proyectos económicos legales e ilegales, generando deforestación, fuerte contaminación a las fuentes hídricas, saqueo de madera y muerte o desplazamiento de fauna endémica de la región.

El Estado colombiano ha reconocido los fuertes daños generados por la ola paramilitar y los empresarios que llegaron a apropiarse ilegalmente de territorios pertenecientes a comunidades en esta zona del país; así como la importancia



de conservar los ecosistemas tropicales, incorporados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con la creación de la Reserva Forestal del Pacífico, del Parque Nacional Natural los Katíos, de la Reserva Forestal del Río León y otras nueve áreas protegidas, a las que se suma la declaración del río Atrato como sujeto de derechos.

Este reconocimiento, sin embargo, no ha sido suficiente y la población sigue siendo fuertemente afectada por la continuidad de la explotación de los recursos naturales, a través de la minería, la agroindustria, la ganadería y la explotación de madera, que han generado fuertes daños al territorio y a la población que allí habita, en una región que es considerada uno de los pulmones del mundo.

Con esto en mente, el Cinep/PPP ha creado esta cartilla, la cual tiene por objetivo compartir conocimientos e información importante para ustedes, líderes y lideresas de estas regiones; con la finalidad de fortalecer los procesos de denuncia y exigibilidad de derechos ambientales en el Bajo Atrato y el Urabá. Aquí encontrarán definiciones básicas, leyes, decretos y herramientas de denuncia y exigibilidad, centrales para complementar el importante trabajo de cuidado ambiental que han desarrollado hombres y mujeres de la región.



Los conflictos socioambientales: un tema de gran importancia



¿Qué son los conflictos socioambientales?

Los conflictos socioambientales se entienden como disputas o diferencias entre actores (personas, organizaciones, empresas e incluso el Estado) que tienen visiones diferentes sobre la forma en la que debe ser usado y explotado el medio ambiente. Es decir, una serie de discrepancias sobre el acceso, la gestión y la valoración de la naturaleza y de su cuidado o explotación (SINCHI, 2023).

¿En Colombia hay conflictos socioambientales?

Durante los últimos años, se ha reportado en Colombia la existencia de cerca de 160 casos de conflictos ambientales relacionados con minería, agroindustria, deforestación y proyectos petroleros o de infraestructura (Indepaz, 2022). Así, nuestro país se sitúa como el tercero de América Latina con mayor número de conflictividades en esta materia, antecedido solo por México y Brasil (Global Atlas of Environmental Justice, 2024). Resultado de esta situación, se ha presentado un escenario de múltiples daños a los ecosistemas y de graves implicaciones para las comunidades que habitan en los territorios afectados.

Es importante recordar que los conflictos socioambientales en Colombia se presentan en entornos de gran complejidad, como lo son: el conflicto armado, donde se pone en evidencia el problema no resuelto del uso y usufructo de la tierra; la tensión generada por distintas concepciones de desarrollo, en la que se ha favorecido un modelo que desconoce la diversidad de concepciones sobre cómo relacionarse con la naturaleza, y un Estado con grandes limitaciones para generar gobernabilidad y legitimidad en el cumplimiento efectivo de la normativa ambiental.

Los daños ambientales

Se definen como una afectación al normal funcionamiento de los ecosistemas o a la renovabilidad de sus componentes. Se caracterizan por:

- a) ser de gran relevancia, pues todo impacto al ecosistema produce un daño al colectivo;
- b) generan incertidumbre, dado que la mayoría de daños al medio ambiente tienen consecuencias que no podemos conocer inmediatamente, pues sus efectos y alcances en la salud de las personas, en los sistemas alimentarios de las comunidades o en los ciclos de vida de especies de fauna y flora requieren de una gran inversión de recursos y del paso de los años para poder ser dimensionados y estudiados con profundidad;
- c) son difusos, pues en muchos casos resulta difícil identificar a los diferentes agentes que han sido causantes del perjuicio o que han aportado a la configuración del daño (Rodríguez, 2016);
- d) por último, podemos decir que los daños ambientales son susceptibles de ser prevenidos o de ser reparados.

De ahí la importancia de ejercer liderazgos comunitarios para el cuidado y protección de los territorios.

Y en el Bajo Atrato chocoano y el Urabá antioqueño ¿cuáles son los principales daños ambientales?

En estas dos subregiones del país es posible agrupar los principales daños medioambientales en tres tipos:



Así, la destrucción masiva de ecosistemas boscosos y arbustivos suele relacionarse con la tala indiscriminada para comercialización de maderas exóticas o deforestación para la potrerización de terrenos, realizada incluso mediante la quema de grandes extensiones de bosque y que tiene como objetivo el desarrollo de actividades agroindustriales o de ganadería extensiva bufalina y vacuna. En cuanto a los daños a los recursos hídricos, es posible encontrar sedimentación y taponamiento de ríos y ciénegas, desvío de cauces para la construcción de obras hidráulicas y contaminación con agroquímicos y fungicidas, los cuales son utilizados para la fumigación de extensiones de cultivos de uso lícito e ilícito o de mercurio para la realización de la actividad minera. Otras contaminaciones se relacionan con lixiviados² producidos por la mala disposición de residuos sólidos o por la ausencia de infraestructura de alcantarillado. Cabe agregar que, además de los daños mencionados, existen numerosos casos de impactos por acciones de caza y pesca ilegal de peces, mamíferos y reptiles, lo cual está generando afectaciones en las cadenas reproductivas de las especies y la migración o desaparición de las mismas en el territorio.

-
2. Los lixiviados son líquidos contaminantes que se producen cuando el agua lluvia o que proviene de distintos cuerpos de agua, se mezcla con residuos depositados en botaderos o vertederos de basura.

NOTA:

Uno de los daños ambientales en el territorio es la deforestación del Cerro de Madre Unión, en Belén de Bajirá, donde muchos árboles han sido talados para la expansión de cultivos de uso lícito e ilícito. Allí también se ha dado la contaminación de los cuerpos de agua.

Otro ejemplo es la contaminación que deja estéril el suelo. Las fumigaciones con dron que se hace a los cultivos agroindustriales provocan que las esporas de los venenos se vayan volando por el aire y dañen los cultivos de los campesinos, afectando sus cultivos de pan coger y su salud.

Liderar para defender: la importancia del liderazgo en asuntos ambientales

A pesar de la gran incertidumbre que puedan generar los daños ambientales, estos se hacen evidentes en la cotidianidad territorial de las comunidades y pueden llegar a tener repercusiones graves e inmediatas en la vida de las personas. Por ello, las afectaciones a los ecosistemas no son un fenómeno aislado de la vida en colectivo, sino que determinan activamente la posibilidad de ejercer nuestros derechos y de contar con una vida digna. Para el caso de Riosucio, Unguía y la subregión del Urabá se ha podido reconocer la manera en que los daños ambientales mencionados configuran afectaciones a dimensiones como la salud, al uso y disfrute del territorio y a la posibilidad de contar con seguridad alimentaria en las comunidades. En la tabla 1 se evidencian algunas de las afectaciones que las comunidades han identificado:



Tabla 1. Afectaciones a las comunidades por daños al medio ambiente

AFECTACIONES	
A la salud	→ Enfermedades gastrointestinales, infecciones vaginales, quistes y abortos debido a aguas contaminadas y a la fumigación aérea. → Enfermedades respiratorias por plagas que aparecen tras la desecación de río y la mala disposición de residuos sólidos → Infecciones en la piel y en los ojos por fumigación aérea.
Al uso y disfrute del territorio	→ Limitaciones al libre tránsito de las comunidades por todo su territorio colectivo. → Imposibilidad de desarrollar prácticas culturales y tradicionales en los territorios. → Imposibilidad de acceder a agua potable por parte de los pobladores. → Inundaciones de pueblos y caseríos por la deforestación de los ríos. → Imposibilidad de conseguir plantas medicinales para tratar enfermedades.
A la seguridad alimentaria	→ Alteración de las prácticas alimentarias. → Disminución de los cultivos y pesca tradicional. → Afectación a la sostenibilidad de las economías locales. → Desnutrición en niños, niñas y adolescentes.

Líderes y lideresas en todo el país se han encargado de alzar la voz, denunciando y exigiendo sus derechos ambientales y los de las comunidades, reconociendo que, sin este elemento, no es posible vivir de manera digna en los territorios.

A continuación, se exponen cinco apartados en los que nos detenemos a revisar la normativa con la que cuenta el país en materia ambiental, identificando:

- 1) derechos y deberes ambientales,
- 2) autoridades competentes en esta materia,
- 3) los distintos mecanismos con los que cuenta la ciudadanía para exigir y proteger sus territorios,
- 4) las rutas para proteger a quienes protegen (población líder y defensora) y
- 5) las agendas de trabajo creadas por líderes y lideresas de Unguía, Riosucio y Urabá para gestionar consensos y rutas de trabajo en la protección del territorio.

En ello, es preciso resaltar que la presente cartilla se realizó teniendo como base las experiencias de escuelas territoriales e intercambios de experiencias realizadas con organizaciones étnico-territoriales y campesinas en los municipios de Unguía y Riosucio en Chocó, y en la subregión del Urabá antioqueño.

Adicionalmente, cabe anotar que es de suma importancia mantener un diálogo constante con la norma, lo cual significa revisar con inquietud sus postulados y afirmaciones, observar la manera como puede ser compatible o incompatible con la realidad de los territorios, analizando su efectividad y observando las maneras en las que se implementa o los motivos con los que se ha intentado justificar su falta de implementación.



En busca de algunas herramientas para proteger el territorio: el derecho ambiental en Colombia



¿Qué es el derecho ambiental?

En Colombia se han creado distintas normas que buscan orientar y determinar la manera como el ser humano debería relacionarse con el ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales que lo componen. A ese grupo de normas se las ha llamado Derecho Ambiental.

¿Cuáles son las normas que regulan los asuntos ambientales en Colombia?

Los tratados internacionales en materia ambiental, así como las diferentes legislaciones y reglamentaciones internas del país, son el resultado de un proceso de reivindicaciones y debates sociales y políticos que surgen en diferentes lugares del planeta y de la nación ante un complejo escenario de conflictividad y crisis ambiental. Estas normas constitucionales han ido tomando identidad propia mediante la adopción de diferentes tratados internacionales y la creación de leyes, decretos y otras disposiciones al interior del país.



Tratados internacionales

¿Qué son los tratados internacionales?

Son acuerdos celebrados entre sujetos de derecho internacional, como Estados, organizaciones o instancias internacionales. Los tratados, una vez suscritos y celebrados, ingresan al ordenamiento jurídico del país y generan obligaciones para el Estado (Cancillería de Colombia, 2024). A continuación, algunos ejemplos de tratados internacionales en materia ambiental dentro del Estado colombiano:

Convenio de Minamata sobre el Mercurio

Aprobado por la Ley 1892 de 2018, esta norma establece mecanismos y deberes de protección a la salud

LEY
1892
DE 2018

humana y el medio ambiente ante las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio³. Reconociendo los efectos tóxicos y nocivos sobre los seres humanos, así como las consecuencias contaminantes del medio ambiente, el convenio de Minamata busca aportar en la regulación de la comercialización y el uso del mercurio en las actividades industriales y mineras del país.

Declaración de Río de 1992

Este documento establece 27 principios que buscan destacar la manera como los diferentes factores sociales, económicos

y ambientales son interdependientes y evolucionan juntos en el tiempo. Así, pone de presente la importancia que los países logren un equilibrio entre el crecimiento económico

3. Las liberaciones de mercurio y de sus compuestos se puedan dar como resultado de diferentes procesos: procesos naturales relacionados con la movilidad del mercurio (como la erosión o la actividad volcánica) o procesos relacionados con la intervención de la acción humana y que se relacionan con el proceso de extracción de minerales o combustibles fósiles (Induanalisis, 2020).

y el cuidado del medio ambiente, para ello, utiliza el concepto de desarrollo sostenible. Algunos principios destacados son:

- **Principio 1:** “los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”.
- **Principio 8:** “para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles (...)”.
- **Principio 10:** “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados (...). Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a disposición de todos (...)”.
- **Principio 20:** “las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación y asegurar un mejor futuro para todos”.
- **Principio 25:** “la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables”.

Acuerdo de Escazú

También conocido como Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en

Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, se adopta en el año 2018 e ingresa al ordenamiento nacional mediante la Ley 2273 de 2022, que lo ratifica y busca “garantizar la implementación plena y efectiva (...) de los

LEY
2273
DE 2022

derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales” (artículo 1 del tratado). En este documento se habla de tres derechos de acceso: acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales.

- Derecho de **acceso a la participación pública** (artículo 7 del tratado): se debe informar a la ciudadanía cuáles son los procesos en los que se toman decisiones ambientales, cuáles son las autoridades responsables y cómo se puede participar. El ejercicio de este derecho también contempla la existencia de una oportunidad para que la ciudadanía presente observaciones, haga comentarios o formule preguntas (Ospina, 2022).
- Derecho de **acceso a la justicia** (artículo 8 del tratado): el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales impugna y recurre decisiones sobre el acceso a la información ambiental, participación pública o que puedan afectar negativamente al medio ambiente (Ospina, 2022).
- Derecho de **acceso a la información** ambiental (artículo 5 del tratado): es la posibilidad de tener acceso a cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato, relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud.

Por otro lado, el acuerdo reconoce la importancia de asistir y apoyar a grupos vulnerables, entendidos como aquellos con dificultades para ejercer con plenitud los derechos de acceso, en el ejercicio de los derechos planteados. De igual manera, se plantea la obligación de los Estados a garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas y agrupaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

La Constitución Ambiental

En Colombia, la Constitución Política de 1991 pone de presente varias disposiciones superiores relacionadas con el tema ambiental y ecológico en el país. Estas disposiciones exponen la forma como se busca regular la relación entre las personas y el Estado con la naturaleza. De esta forma, es posible encontrar en nuestra constitución: derechos en materia ambiental; normas que otorgan facultades y/o deberes al Estado en temas ambientales; prohibiciones y deberes de los ciudadanos en la materia y normas que presentan las herramientas jurídicas para exigir, proteger e implementar los derechos ambientales (Clavijo y Jácome, 2021).



Derechos en materia ambiental dispuestos en la constitución

En Colombia, los ciudadanos contamos con el derecho a gozar de un medio ambiente sano y a que se nos garantice participar en las decisiones que lo puedan afectar (artículo 79). Además, es posible afirmar que los derechos a la vida (artículo 11), la educación (artículo 67) y la salud (artículo 49) están íntimamente ligados con la protección del medio ambiente sano.

Prohibiciones y deberes de los ciudadanos

A la ciudadanía le compete el deber de proteger las riquezas culturales, los recursos naturales y encaminar sus acciones al mantenimiento de un medio ambiente sano (artículo 95). Igualmente, la constitución declara la función ecológica de la propiedad, estableciendo que su uso y administración debe estar orientado no solo por el interés particular, sino también por su armonía con el ambiente (artículo 58).

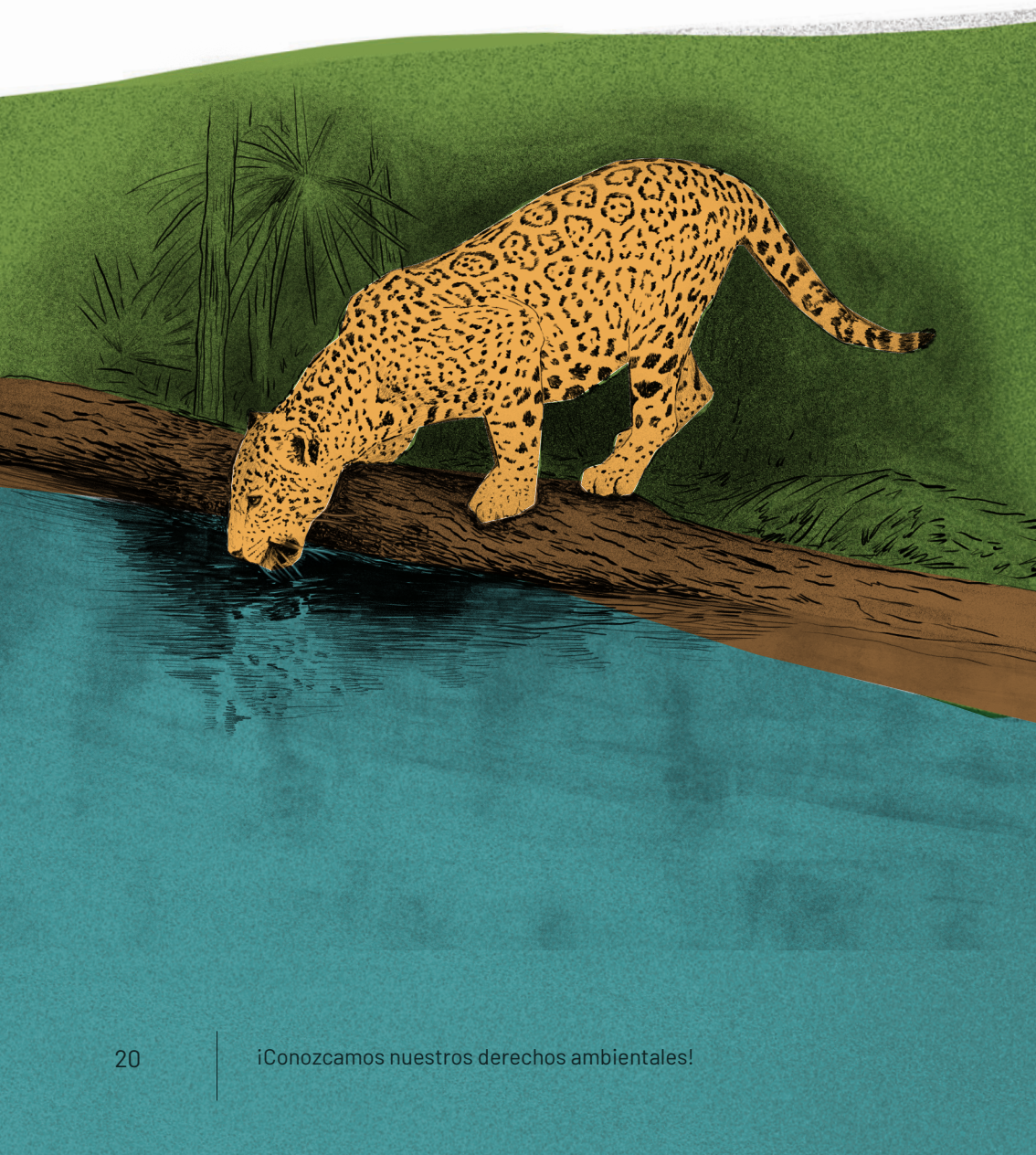
Normas que imponen obligaciones al Estado

Por otro lado, la constitución incluye una serie de obligaciones para el Estado en materia ambiental. Entre otras se encuentran las siguientes: la obligación de garantizar principios, derechos y deberes de la constitución, incluyendo los relacionados con el cuidado del medio ambiente (artículo 2), la responsabilidad de proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica (entre las que se encuentra el Chocó) y fomentar la educación para el logro de estos fines (artículo 79). Asimismo, deberá planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales (en adelante RN) para garantizar el desarrollo sostenible, al tiempo que deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental e imponer sanciones ante daños causados (artículo 80).

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

- 1) ¿Cuál es el nivel de acceso a la información sobre regulación y legislación ambiental en los territorios del Bajo Atrato y el Urabá? ¿Qué estrategias se pueden usar para exigir el acceso a esta información??
- 2) ¿El Estado garantiza la participación de la población en espacios donde se toman decisiones en materia ambiental en los territorios? ¿Cómo se puede exigir esta participación?
- 3) ¿Por qué conocer la legislación ambiental puede ser una herramienta poderosa para hacer frente a los conflictos socioambientales que se presentan en la región?
- 4) ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres de las comunidades en la conservación y cuidado del medio ambiente? ¿Se ha reconocido el papel de las mujeres dentro de las comunidades?

Conocidas las generalidades de la normativa ambiental, profundizaremos en tres elementos: las autoridades o entidades administrativas a las que se le ha otorgado competencia para coordinar y ejecutar funciones en materia ambiental; la manera como se comprenden los recursos naturales y los permisos ambientales existentes para su aprovechamiento, deteniéndonos en bosques y minas, para así, finalmente, observar las sanciones administrativas en materia ambiental y los delitos a los recursos ambientales que contempla el código penal.



Autoridades ambientales



¿Qué es una autoridad ambiental?

Las autoridades ambientales o autoridades administrativas ambientales son las entidades estatales encargadas de gestionar los asuntos ambientales y de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en el país. Las autoridades ambientales están agrupadas en el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y deben responder en su actuar a los principios ambientales, los cuales indican el horizonte de acción en la materia.

Sistema Nacional Ambiental (SINA)

El Sistema Nacional Ambiental es el principal mecanismo con el que cuenta Colombia para el manejo ambiental. Lo creó la Ley 99 de 1993 y lo componen: autoridades ambientales de distinto tipo y orientaciones, normas, actividades, programas e instituciones que buscan poner en marcha los principios ambientales del país. Hacen parte del SINA todas las autoridades ambientales o entidades que sean responsables de la política y acción ambiental. Son parte del SINA⁴:

4. Dentro del SINA es posible encontrar entidades pertenecientes al nivel centralizado, es decir, dirigidas administrativa y financieramente desde el gobierno nacional y entidades del nivel descentralizado, como los institutos de investigación ambiental y biológica, los cuales aún cuando se encuentran vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles (nivel centralizado), cuentan con autonomía administrativa y patrimonio independiente. Asimismo, encontramos organismos autónomos como las CAR, que se encuentran en el nivel regional-territorial, pero que como su nombre indica, cuentan con autonomía administrativa y financiera, no se encuentran vinculados al Ministerio de Ambiente, aun cuando este se encargue de supervisarlas.

Tabla 2. Autoridades Ambientales que conforman el SINA

Nivel centralizado			
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales	 Parques Nacionales Naturales de Colombia	
Nivel descentralizado			
Institutos de Investigación		Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John VonNeumann”	
Órganos de control			
 Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales	 Policía Ambiental y Ecológica	 Defensoría del Pueblo	 Contraloría
Entes territoriales			
Departamentos (Gobernación, Asambleas departamentales)	Municipios (Alcaldías, consejos municipales)	Entidades Territoriales Indígenas	Distritos
Organismos autónomos			
Corporaciones Autónomas regionales			

Entes territoriales

Funciones ambientales de los gobiernos regionales



LEY
99
DE 1993

Las obligaciones del Estado en materia ambiental dan lugar a una serie de funciones ambientales para los gobiernos subnacionales como departamentos, municipios y territorios indígenas. Estas funciones se establecen en la Constitución y se precisan en el capítulo noveno de la Ley 99 de 1993, titulado *De las funciones de las entidades territoriales y de la planificación ambiental*. A continuación, se enuncian algunas de ellas:

a) **Funciones ambientales de los departamentos:**

- Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables (en adelante, RNR).
- Expedir disposiciones departamentales especiales relacionadas con el medio ambiente. Las asambleas departamentales deberán expedir, mediante ordenanzas, disposiciones relacionadas con el ambiente y la planeación del territorio (artículo 300 de la Constitución).
- Dar apoyo a las CAR, a municipios y demás entidades territoriales que se creen en el nivel departamental, así como ejercer, en coordinación con las demás entidades del SINA, funciones de control y vigilancia del medio ambiente.
- Promover, cofinanciar o ejecutar obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas hidrográficas.

b) **Funciones ambientales de los municipios y territorios**

indígenas: tanto los municipios como los territorios indígenas tendrán las mismas funciones en materia ambiental, estas son:

- Dictar las normas necesarias para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico del municipio.
- Ejercer a través del alcalde y con el apoyo de la Policía Nacional y demás instituciones del SINA, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y de los RNR, con el fin de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.
- Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos del municipio, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos.
- Promover, ejecutar, elaborar y adoptar programas, políticas y proyectos ambientales por cuenta propia y articulándose con los emitidos por el nivel nacional y regional.
- Los territorios indígenas deberán velar por la preservación de los recursos naturales. La explotación de estos en dichos territorios deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económicas de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno deberá propiciar la participación de los representantes de las respectivas comunidades (artículo 330 de la Constitución).

Autoridades ambientales del nivel centralizado



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Es el organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los RNR, se encarga de formular la política nacional ambiental y de coordinar el SINA, asumiendo el objetivo de que se adopten y ejecuten las políticas, planes, programas y proyectos respectivos a la materia. Así pues, el Ministerio de Ambiente es la máxima autoridad en miras a dar cumplimiento a los deberes y derechos de particulares y del Estado relacionados con el medio ambiente.

Funciones del Ministerio de Ambiente (*acorde a la Ley 99 de 1993 y el Decreto 3570 de 2011*):

- Diseñar y formular la política nacional ambiental y de recursos naturales renovables, así como reglas y criterios de ordenamiento ambiental para asegurar la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
- Regular las condiciones generales para el saneamiento del ambiente y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales.
- Dirigir y coordinar el SINA, mecanismo de ejecución de política, planes, programas y proyectos ambientales. Asimismo, apoya a los demás ministerios y entidades estatales, en la formulación de políticas públicas que, por su materia, tengan implicaciones ambientales y de desarrollo sostenible.
- Ejercer inspección y vigilancia de las CAR y ejercer evaluación y control de los efectos del deterioro ambiental

que puedan presentarse por ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, exploración, explotación o utilización de RNR. También ordena la expedición de licencias ambientales a cargo del Ministerio de Ambiente y la suspensión de trabajos o actividades cuando tuviese lugar.

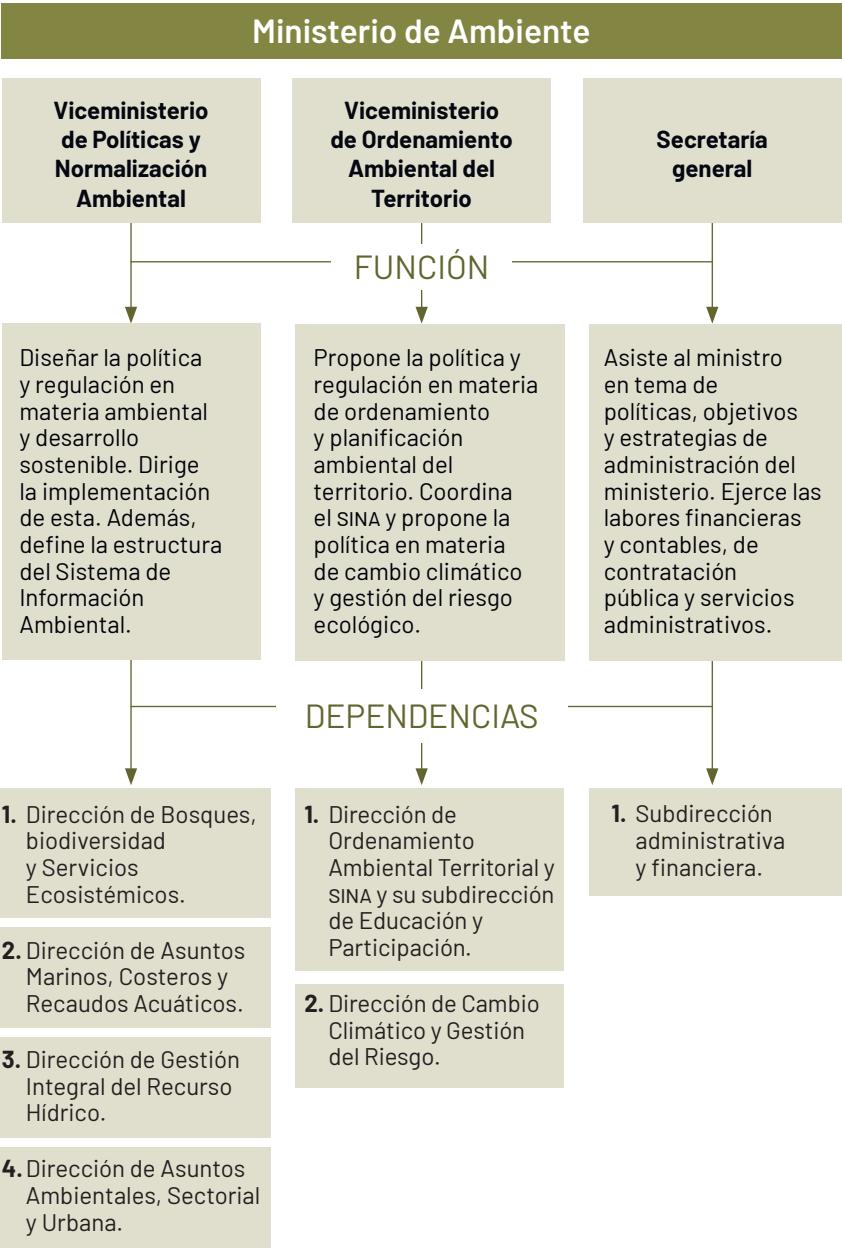
- Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el desarrollo de la economía.
- Establecer las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales y de Reserva Forestal Nacional, y reglamentar su uso y funcionamiento. También es labor del ministerio adelantar ante la autoridad competente la expropiación de bienes por razones de utilidad pública o interés social definidos por la ley.



Estructura del Ministerio de Ambiente

El ministerio está organizado en dos viceministerios, cada uno con sus respectivas direcciones y oficinas, una secretaría general y el despacho de la ministra (ver tabla 3).

Tabla 3. Estructura del Ministerio de Ambiente





Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)

¿Qué es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales?

La ANLA es la autoridad ambiental encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible del país (ANLA, 2024). Se compone de un Despacho General y cinco subdirecciones: Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental; de Evaluación de Licencias Ambientales; Seguimiento de Licencias Ambientales; Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, y la Subdirección Administrativa y Financiera.

Funciones de la ANLA

- Otorga o niega las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y les realiza el debido seguimiento.
- Velar por el cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana relativos a permisos, licencias y trámites ambientales.
- Aprueba los actos administrativos de licencias ambientales para explotaciones mineras, permisos y concesiones de aprovechamiento forestal y construcción de infraestructura vial.

Participación Ciudadana con la ANLA

Dentro de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, es posible encontrar la subdirección de mecanismos de participación ciudadana, la cual se encarga de: ordenar y presidir las audiencias públicas ambientales en los ámbitos de su competencia y de realizar programas de formación, capacitación

y sensibilización para grupos de interés de la entidad que permitan el fortalecimiento de la participación ciudadana.



PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Es una Unidad Administrativa Especial encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Su misión es la conservación, perpetuación y protección de los recursos naturales presentes en las áreas protegidas, para así garantizar la supervivencia de especies y la oferta de bienes y servicios naturales.

El SINAP consiste en el conjunto de áreas protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, para cumplir con el objetivo de conservación del país. Además, esta unidad se encarga de otorgar permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento de RNR en las áreas del SPNN y emitir concepto sobre proceso de licencias y permisos ambientales de obras que afecten o puedan afectar estas áreas.

Organismos autónomos



Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)

Son las principales autoridades ambientales a nivel territorial, cuentan con autonomía administrativa y financiera para ejecutar sus funciones y son supervisadas por el Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible. Las CAR están integradas por entidades territoriales que, por sus características geográficas, constituyen un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrográfica. En el departamento del Chocó, la CAR se conoce como CODECHOCÓ y en la subregión del Urabá antioqueño como CORPOURABÁ (art. 23. Ley 99 de 1993).

Objeto: Las CAR tienen el objeto de ejecutar políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables. También tienen como objeto la aplicación de disposiciones legales vigentes sobre disposición, administración, manejo y aprovechamiento de los RNR.

Funciones de las CAR:

- Las CAR ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. Se encargan de ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental.
- Se les delega la función de **promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y manejo adecuado de los RNR**. Asimismo, asesoran a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental.
- Otorgan permisos, concesiones, autorizaciones y licencias ambientales para el uso, aprovechamiento y movilización de los RNR o el desarrollo de actividades que puedan afectar el medio ambiente. En ese sentido, otorgan permisos y concesiones para aprovechamiento forestal, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas.
- **En coordinación con autoridades de comunidades indígenas y negras, adelantan programas y proyectos de desarrollo sostenible y de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los RNR del medio ambiente.** Las CAR también deben cumplir con la función de

promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a comunidades indígenas y negras, así como apoyarlas en funciones de planificación.

- Implantan y operan el Sistema de Información Ambiental en su jurisdicción e imponen las medidas de policía y las sanciones previstas en caso de violación de normas de protección ambiental y manejo de RNR.
- Ejercen funciones de control, evaluación y seguimiento ambiental del uso del agua, suelo y aire, así como de actividades de exploración, explotación, transporte, uso y depósito de RNR.



Funciones particulares de CODECHOCÓ: además de aquellas contempladas por la ley, el artículo 39 de la Ley 99 de 1993 establece funciones específicas para CODECHOCÓ. Estas son:

- **La protección del medio ambiente chocoano como área especial de reserva ecológica de Colombia, de interés mundial** y como recipiente singular de la megabiodiversidad del trópico húmedo.
- Impulsar la integración de las comunidades indígenas y negras al proceso de conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos.
- Propiciar el conocimiento de los recursos ambientales renovables y del medio ambiente chocoano; fomentar el uso de tecnología apropiada y dictar disposiciones para el manejo adecuado del singular ecosistema chocoano y propiciar la cooperación y ayuda de la comunidad internacional.



Funciones particulares de CORPOURABÁ: el artículo 40 de la Ley 99 de 1993 precisa que serán funciones de CORPOURABÁ:

- Planeación, investigación científica y transferencia de tecnología, encargada principalmente de promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos de la región del Urabá.
- Fomentar la integración de las comunidades tradicionales que habitan la región y de sus métodos ancestrales de aprovechamiento de la naturaleza al proceso de conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

- 1) Al inicio de la cartilla decimos que hay una disputa entre las distintas concepciones de desarrollo que tienen los actores. ¿Cómo se ve esto reflejado en el territorio, quiénes tienen distintas ideas sobre cómo relacionarse con el territorio?
- 2) Según las funciones explicadas, ¿las entidades del Estado tienen el deber de garantizar que las concepciones de desarrollo de comunidades negras e indígenas y campesinas se respeten? ¿Se le puede hacer esta exigencia a las entidades estatales?
- 3) ¿Hay relación entre las leyes y las entidades estatales que existen en el país? ¿Las entidades deben cumplir lo dispuesto en las leyes nacionales e internacionales?

Los recursos naturales



¿Qué son los recursos naturales?

Los recursos naturales son elementos que provienen directamente de la naturaleza y del medio ambiente, lo cual significa que no son producidos por los seres humanos, pero que son susceptibles de ser utilizados en distintos procesos productivos. Los recursos naturales pueden dividirse en dos: recursos naturales renovables (RNR) y recursos naturales no renovables (en adelante, RNNR).

- Los recursos naturales renovables son aquellos que la propia naturaleza repone periódicamente mediante procesos biológicos o de otro tipo. Por ejemplo, el agua, el aire, los frutos o las plantas.
- Los recursos naturales no renovables se caracterizan por cuanto existen en cantidades limitadas y no están sujetos a una renovación periódica por procesos naturales. En otras palabras, son aquellos susceptibles de agotamiento. Por ejemplo, los metales preciosos o los combustibles fósiles como el carbón.

Cuando el aprovechamiento de los recursos naturales exceda el uso doméstico o vital y comienza a realizarse con fines comerciales o con un gran volumen de explotación, deben adquirirse una serie de **permisos ambientales** otorgados por el Estado. Estos permisos, llevan el nombre de Licencias Ambientales.

Permisos y licencias ambientales

¿Qué es y para qué sirve una licencia ambiental?

Es una autorización otorgada por autoridades ambientales para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda producir deterioro grave a los RNR o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje. De este modo, la licencia ambiental establece una serie de requisitos relacionados con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.

Características de los permisos ambientales:

- Las licencias ambientales son autorizaciones administrativas, destinadas al cumplimiento de los fines y propósitos estatales en materia de protección y conservación de los recursos naturales y el ambiente.
- Las licencias ambientales se dan solamente para proyectos, obras y actividades que se encuentren enlistadas por el Gobierno nacional. En otras palabras, solo se requerirá licencia ambiental para aquellas actividades que la ley determine.

PARA SEGUIR INVESTIGANDO:

- 1) ¿Qué actividades realizadas en nuestros territorios requieren de una licencia o permiso ambiental?



¿Cómo se otorga una licencia ambiental?

Quienes deseen obtener una licencia ambiental deben acudir a la autoridad ambiental competente con la solicitud de licencia y un Estudio de Impacto Ambiental. La autoridad ambiental podrá requerir información adicional al solicitante interesado o a otras entidades competentes. Posteriormente, la autoridad decidirá mediante resolución sobre la viabilidad ambiental del proyecto o actividad, y otorgará o negará la licencia (art. 58 de la Ley 99 de 1993).

Estudio de impacto ambiental

Es el conjunto de información que presenta el solicitante de una licencia ambiental sobre la localización del proyecto o actividad a desarrollar y los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio ambiente que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad, así como los impactos que puedan producirse. Por ello, el estudio también incluirá el diseño de planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos y el plan de manejo ambiental del proyecto (artículo 57 de la Ley 99 de 1993).

Aprovechamiento de recursos naturales en territorios colectivos

El aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables en territorios colectivos de comunidades indígenas y negras cuenta con una serie de mecanismos diferenciados diseñados para que las autoridades tradicionales, organizadas en resguardos y consejos comunitarios, puedan ejercer un gobierno propio sobre la manera como se pueda dar o no el aprovechamiento y explotación de estos. Estos mecanismos buscan plantear un diálogo entre la normativa nacional y aquella destinada a los pueblos étnicos. Además, pone en evidencia las múltiples perspectivas sobre desarrollo y uso de los servicios ecosistémicos. En la siguiente tabla

podemos revisar en qué consisten los mecanismos étnicos para el aprovechamiento de recursos naturales en territorios colectivos ¿Los conocías?

Tabla 4. Mecanismos para el aprovechamiento de recursos naturales en territorios colectivos de comunidades étnicas

Plan de Etnodesarrollo

Principal instrumento de ejercicio de gobernanza y planeación en los territorios colectivos de comunidades negras. Definen la visión propia de desarrollo de las comunidades negras, representadas por los consejos comunitarios, y tienen como finalidad promover de manera ordenada y sostenible el uso y aprovechamiento del territorio, así como el ejercicio y preservación de su identidad, autonomía y tradiciones.

Planes de Vida

Se presentan como un instrumento autónomo de planificación para los pueblos indígenas, que responde a un proceso social étnico para la autodeterminación y que pretende generar un mandato respecto al ordenamiento de la propiedad colectiva, la atención a las necesidades y la preservación de usos y costumbres (Departamento Nacional de Planeación, 2018).

Plan de Manejo Ambiental en territorios colectivos

Es un mecanismo propio de gobierno y manejo del territorio colectivo de comunidades negras e indígenas, adoptado como instrumento de planificación de uso, manejo y administración ambiental del territorio y de los RNR. Son elaborados por los consejos comunitarios con apoyo de autoridades ambientales. En él se plasma: diagnóstico ambiental, áreas de producción, aprovechamiento forestal o minero, de agricultura, conservación y recuperación. Asimismo, contempla los usos del suelo y la identificación de factores de deterioro ambiental y la definición de áreas de uso comunitarias o individuales.

Reglamento Interno Comunitario

Son la expresión del derecho propio de las comunidades. En él se encuentran el conjunto de normas expedidas por el Consejo Comunitario para velar por la conservación, el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales dentro de los territorios colectivos. Así, en este documento se plasmarán las regulaciones de los usos tradicionales y de consumo doméstico sobre: la caza, pesca, aguas, playas, riberas, bosques, manglares, etc.

Reglamento Interno Minero de Consejos Comunitarios

Es el conjunto de normas expedidas por el Consejo Comunitario para velar por la conservación, el uso, el manejo y el aprovechamiento sostenible de los RNNR dentro de los territorios colectivos (artículo 5to de la Ley 70 de 1993). Este reglamento contendrá: diagnóstico sobre las prácticas ancestrales de producción minera; zonificación de lugares de ejercicio de minería; caracterización de las áreas con deterioro ambiental por efectos de la minería en el territorio colectivo y las medidas para su recuperación; acciones para desestimular las prácticas mineras ambientalmente insostenibles, y el diseño de estrategias para que los consejos comunitarios, en coordinación con las autoridades competentes, puedan prevenir la explotación ilícita de minerales y mitigar sus efectos en los territorios colectivos.



Los bosques

¿Qué es un bosque?

Los bosques son entendidos como parte de la flora silvestre, esto es, el conjunto de especies e individuos vegetales del territorio que no se han plantado o mejorado por el hombre. Por otro lado, una plantación forestal, es aquel bosque originado por la intervención directa del ser humano (Decreto 1791 de 1996).

¿Qué es un bosque para tu comunidad?

Importancia de los bosques

Los bosques tienen cuatro funciones fundamentales para la vida humana, vegetal y animal: a) los bosques permiten la continuidad de los ciclos biogeoquímicos, como los ciclos hidrológicos y del carbono; b) son pilares para la estabilidad climática en tanto son los encargados de la absorción de la luz y el calor, para así, refrescar y humedecer los suelos; c) son el hábitat y medio de vida de la biodiversidad terrestre y acuática del planeta, así como también son los reguladores hídricos. Sin los bosques puede haber derrumbes, avalanchas e inundaciones, o un déficit de humedad en periodos secos (Rodríguez y Páez, 2012).

¿Por qué es importante el bosque para sus comunidades?

Recordemos que 54 de los 81 tipos de ecosistemas naturales existentes en nuestro país son de tipo forestal y 6 son arbustivos. En ellos se sitúa la mayor parte de la biodiversidad de nuestra nación, motivo por el cual resultan preocupantes los altos índices de deforestación que están teniendo lugar en las diferentes regiones del país y que representan una de las principales problemáticas ambientales que afrontamos como sociedad. Algunas mediciones estiman que entre 2010 y 2015 hubo un promedio deforestado de 120 000 hectáreas por año y entre 2015 y 2021, uno de 183 400 (Rodríguez, 2023). Si bien los años 2022 y 2023 han mostrado una reducción en el área deforestada, es importante señalar que el 2024 inició, en su primer trimestre, con un incremento del 40 % en comparación con el mismo periodo de tiempo en 2023 (Ministerio de Ambiente, 2024).

Permisos de Aprovechamiento Forestal

¿Qué son los permisos de aprovechamiento forestal y qué entidad tiene competencia para otorgarlos?

Son un documento entregado por la autoridad ambiental en los que se le otorga a una persona, empresa o colectivo que haya demostrado cumplir con los requerimientos técnicos requeridos, el derecho legal de extraer o cosechar materiales del bosque, como madera, frutas, resinas, entre otras, durante todo el proceso productivo del bien. La entidad encargada de otorgar los permisos de aprovechamiento forestal son las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) como CODECHOCÓ y CORPOURABÁ.



¿Cuáles son los tipos de aprovechamiento forestal?

Según la extensión y el objetivo del aprovechamiento forestal, se requerirá uno de los siguientes tres tipos de permisos:

- Aprovechamientos únicos: son aquellos que se realizan por una única vez, en áreas donde se demuestre que el suelo puede tener un uso diferente al forestal.
- Aprovechamientos persistentes: aquellos que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas que permitan su renovación.
- Aprovechamiento doméstico: consiste en el uso exclusivo del bosque para satisfacer necesidades domésticas sin que se pueda comercializar productos.

Requisitos y procedimientos para que se otorguen permisos ambientales: para que se emita un permiso de aprovechamiento forestal, es importante, en primera medida, conocer el **Plan de Ordenamiento Forestal**, que es un estudio realizado por las corporaciones autónomas en el que, con base a los distintos aspectos naturales, sociales y económicos de un bosque, se busca garantizar un uso organizado, adecuado y sostenible de los recursos disponibles. Posteriormente, deberán cumplirse con diversos requisitos y la documentación necesaria que compone la solicitud del permiso. Entre ellos, se encuentran los **planes de aprovechamiento forestal**, que son una descripción de sistemas, métodos y equipos que se usarán para cosechar y extraer productos del bosque y, por otro lado, **los planes de manejo forestal**, entendido como un estudio que dé cuenta del conjunto de técnicas de silvicultura que aseguren los principios de utilización racional y manejo sostenible del recurso natural.

Aprovechamiento forestal en territorios colectivos: con el Decreto 1384 de 2023 que reglamenta el capítulo cuarto

de la Ley 70 de 1993, se reconoció la propiedad colectiva de las comunidades negras sobre los bosques presentes en sus territorios. No obstante, el aprovechamiento forestal con fines comerciales que se dé en estos bosques requiere un permiso ambiental que se solicita por medio del representante legal del Consejo Comunitario y es otorgado por la CAR. Asimismo, en el caso de comunidades indígenas y con fundamento en el artículo 15 de la Ley 21 de 1991, se requerirá una solicitud por parte del representante legal de la comunidad con aval del Gobernador Mayor Indígena.

La minería

¿Qué es una mina?

Son yacimientos, formaciones o criaderos de minerales o materias fósiles que se encuentran en el suelo o en el subsuelo, y que resultan útiles y aprovechables económicamente (Código de Minas, 2001).

El aprovechamiento de recursos mineros

Recordemos que los recursos que se encuentran en el subsuelo del territorio nacional son propiedad del Estado (artículo 332 de la Constitución Política). Por este motivo, y siguiendo el Código de Minas, se establece que solamente podrá adquirirse el derecho a explorar y explotar minas mediante un **contrato de concesión minera** (artículo 14), el cual consiste en un acuerdo entre el Estado y un particular para explotar o extraer minerales en un área determinada y durante un tiempo establecido dentro de un área específica. Para que tenga lugar un contrato de concesión minera, primero debe realizarse un Plan de Trabajos y Obras (PTO), así como un proceso de licenciamiento ambiental y un plan de manejo ambiental.

¿Qué es y para qué sirve el Programa de Trabajos y Obras?

El PTO es un documento técnico que se ocupa de planear las labores a ejecutar en las etapas de montaje, explotación y cierre de la mina, y de suministrar las bases técnicas, logísticas, económicas y comerciales para poder desarrollar un proyecto minero (Agencia Nacional de Minería, 2015). Contiene los siguientes elementos: delimitación del área de explotación; cálculo y características de las reservas a explotar; descripción de las obras e instalaciones; duración de la producción esperada, y planes mineros de explotación, recuperación y cierre.

Licencia de exploración y licencia de explotación

La licencia de exploración consiste en la identificación y evaluación de la existencia de los posibles recursos minerales mediante la realización de estudios y evaluaciones técnicas preliminares. Para llevarla a cabo se deben cumplir los siguientes requisitos: PTO, capacidad técnica y financiera y cumplimiento ambiental. Tiene una duración de tres años, prorrogable por dos más. Por otro lado, la licencia de explotación tiene como fin extraer y comercializar los recursos minerales identificados mediante la extracción, procesamiento y comercialización de minerales. Tiene una duración de 30 años, prorrogable por períodos adicionales de hasta 30 años. Esto quiere decir que una empresa puede estar 60 años o más explotando los recursos naturales de un área específica. Otras licencias otorgadas en el marco de la explotación minera son: permiso de prospección y explotación de aguas subterráneas, concesión de aguas superficiales y subterráneas, permiso de vertimientos, emisiones y de ocupación de cauces (Agencia Nacional de Minería, 2015).

Las entidades competentes para otorgar y hacer seguimiento a estos permisos o licencias ambientales son principalmente la ANLA y las Corporaciones Autónomas, así como algunos municipios, distritos y áreas metropolitanas.

¿Qué es y para qué sirve el Plan de Manejo Ambiental en la explotación minera?

Todas aquellas actividades que causen deterioro ambiental deben contar con un Plan de Manejo Ambiental. Consiste en un conjunto de medidas y acciones diseñadas para prevenir, mitigar, controlar y compensar los impactos ambientales negativos que pueden generarse por las actividades de explotación minera, asegurando así que la minería se realice de manera sostenible y mitigando, en lo posible, los impactos negativos sobre el medio ambiente.

Es decir, sirve para garantizar que las operaciones mineras se realicen de manera responsable y sostenible, minimizando los impactos negativos sobre el medio ambiente y las comunidades locales, siendo los principales propósitos los siguientes: la reducción de daños, el uso eficiente de recursos, control de contaminación, la protección de la salud humana, la regulación ambiental y los permisos y licencias.

Concesión minera especial para comunidades negras (Decreto 1396 de 2023): este contrato se otorga cuando las comunidades negras reconocidas en la Ley 70 de 1993 ejerzan su derecho de prelación, pudiendo así aprovechar los recursos naturales no renovables mediante el uso de métodos ancestrales. Dicho contrato se aplica a yacimientos ubicados dentro de sus territorios colectivos o en trámite de adjudicación y ocupados ancestralmente (art. 131 del Código de Minas). Este tipo de contrato se otorgará respetando posibles títulos existentes, bajo solicitud del representante legal del Consejo Comunitario y requiriendo un Plan de Manejo Ambiental y un PTO.

Zonas Mineras Indígenas: el Código Nacional de Minas contempla el señalamiento y delimitación de zonas mineras indígenas, donde la exploración y explotación del suelo y del subsuelo minero deberán ajustarse a las disposiciones especiales sobre protección y participación de las comunidades indígenas (art. 122 del código). En estas zonas, las concesiones

se otorgarán bajo la solicitud del colectivo y contarán con el derecho de prelación.



Agencia Nacional de Minería (ANM)

La Agencia Nacional de Minería es una agencia del Estado que pertenece al sector descentralizado de la rama ejecutiva nacional y se encuentra adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Su actuar se centra en la administración adecuada de los recursos minerales del país, los cuales son propiedad del Estado. Así, busca su óptimo aprovechamiento, desde la sostenibilidad de los recursos mineros.

Funciones de la ANM dispuestas en el Decreto 4134 de 2011:

- Administrar los recursos minerales del Estado y conceder derechos para su exploración y explotación. De este modo, se encarga de ejercer las funciones de autoridad minera del territorio nacional. Decimos que la ANM es la autoridad concedente, porque es quien otorga los contratos de concesión para la explotación de minas.
- Desarrollar estrategias de acompañamiento, asistencia técnica y fomento a los titulares mineros.
- Apoyar la realización de los procesos de consulta previa a los grupos étnicos en coordinación con las autoridades competentes.
- Apoya al Ministerio de Minas y Energía en la formulación y ejecución de la política para prevenir y controlar la explotación ilícita de minerales.

Delitos contra los recursos naturales e infracciones en materia ambiental



¿Qué es un delito y una infracción ambiental?

Los delitos son conductas o comportamientos humanos que en su acción u omisión se caracterizan por ser dolosas (de mala fe) o culposas⁵ y que por lo tanto conllevan un castigo o pena. Se caracterizan por contener una conducta punible, lo cual significa que dicha conducta debe ser **tipificada y antijurídica**. La tipificación hace referencia a que un delito es delito en la medida en que la ley lo señale como tal. En otras palabras, será delito solo aquella conducta que aparezca como tal en el Código Penal. Por otro lado, la antijuridicidad señala que para que una conducta sea punible, esta debe representar una lesión o un peligro para un bien jurídicamente protegido, como los derechos humanos o en este caso, los recursos naturales. Es decir, un delito se define como tal por representar una conducta contraria a derecho.

Por otro lado, las **infracciones ambientales** son aquellas acciones u omisiones que violen la normativa establecida en el Código de Recursos Naturales Renovables y en

5. La culpa es un error de conducta que una persona prudente y diligente colocada en las mismas circunstancias no hubiera cometido. La culpa puede ser más o menos grave: existiendo culpa grave, leve o levisima. El dolo, por otro lado, es aquella acción premeditada e intencionada de generar daño o injuria a una persona o a la propiedad de otro, que en el caso que nos ocupa, es el medio ambiente como bien colectivo.

otras disposiciones ambientales vigentes. También se considera infracción el causar daño al medio ambiente bajo las condiciones de daño, culpa o la mala fe. Las infracciones ambientales conllevan a una serie de sanciones administrativas, las cuales cuentan con una función preventiva, correctiva y compensatoria. Algunos ejemplos de sanciones contempladas dentro de la Ley 1333 de 2009 que permiten ilustrar la noción de infracción ambiental son: trabajo comunitario; restitución de especímenes de fauna y flora; multas diarias hasta por 5 000 salarios mínimos legales vigentes; cierre temporal o definitivo del establecimiento; revocatoria o caducidad de licencia, autorización, concesión o permiso ambiental y demolición de obra a costa del infractor.



Los delitos contra los recursos naturales en nuestro código penal

Dentro de nuestro Código Penal encontramos cerca de 17 delitos relacionados con el aprovechamiento irregular de los recursos naturales, la contaminación ambiental, las áreas de especial importancia ecológica y los baldíos de la nación. Algunos de estos son: aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, caza o pesca ilegal, deforestación, explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación ambiental e invasión de áreas de especial importancia ecológica. En la siguiente tabla se exponen cinco delitos contra los recursos naturales que encuentran relación con los daños ambientales identificados en las subregiones del Bajo Atrato chocoano y el Urabá antioqueño.

Tabla 5. Delitos contra los recursos naturales

DELITO	
Deforestación (Art. 330)	
Contenido–acción punible El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente tale, queme, corte, arranque o destruya (acción) áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural (objeto).	Pena o castigo  Prisión: entre 60 y 144 meses.  Multa: entre 134 y 50 000 SMLMV.
DELITO	
Exploración ilícita de yacimiento minero y otros materiales (Art. 332)	
Contenido–acción punible Quien sin permiso o incumpliendo la norma explote (acción) arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente (objeto).	Pena o castigo  Prisión: entre 32 y 144 meses.  Multa: entre 133 y 50 000 SMLMV.
DELITO	
Invasión de áreas de especial importancia ecológica (Art. 336)	
Contenido–acción punible El que invada, permanezca así sea de manera temporal o realice uso indebido de los recursos naturales (acción) en área de reserva forestal, ecosistemas de importancia ecológica, playas, resguardos o reservas indígenas, terrenos de propiedad colectiva de comunidades negras, parque regional o nacional natural, área o ecosistema de interés estratégico, área protegida (objeto).	Pena o castigo  Prisión: entre 48 y 144 meses.  Multa: entre 134 y 50 000 SMLMV.

DELITO

Contaminación ambiental (Art. 334)

Contenido-acción punible

El que contamine, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertimientos, radiaciones, ruidos, depósitos o disposiciones (acción) al aire, la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas o demás recursos naturales (objeto) en tal forma que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente, que ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales.

Pena o castigo



Prisión: entre 69 y 140 meses.



Multa: entre 140 y 50 000 SMLMV.

DELITO

Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables (Art. 328)

Contenido-acción punible

Quien, incumpliendo la norma, se apropie, acceda, capture, mantenga, introduzca, explote, aproveche, comercie, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de (acción) especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos (objeto).

Pena o castigo



Prisión: entre 60 y 135 meses.



Multa: entre 134 y 43 750 SMLMV.

Fuente: elaboración propia con base en el Código Penal.

Entidades encargadas de conocer los delitos contra recursos naturales y de ejercer control sobre autoridades ambientales



Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios

Las procuradurías delegadas ejercen “funciones preventivas y de control de gestión, disciplinarias, de protección y defensa de los derechos humanos y de intervención ante las autoridades administrativas y judiciales” (Decreto Ley 262 del 2000, artículo 23). Particularmente la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales cumple con funciones de intervención judicial y prevención frente a la conservación, protección y defensa del medio ambiente. Para ello, esta dirección se encarga de:

- a) realizar vigilancia y control del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las CAR, secretarías de ambiente y demás entidades del SINA, para el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los particulares en materia ambiental;
- b) realiza seguimiento a la política de lucha contra la deforestación y su relación con el despojo;
- c) adelanta acciones de vigilancia a los cuerpos de agua y de acompañamiento a temas de minería y de expedición de licencias ambientales.

Finalmente, es labor de esta procuraduría el hacer seguimiento a ecosistemas estratégicos en defensa del ambiente, como aquellos pertenecientes al Chocó biogeográfico (Procuraduría General de la Nación, 2020).



Dirección especializada de la Fiscalía para los delitos contra los Recursos Naturales y el Medio ambiente (Ley 2111 de 2021 y resolución 677 de 2023)

Esta dirección de la Fiscalía tiene como objetivo la desarticulación y afectación de la criminalidad organizada asociada a delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Por ello, se encarga de investigar y judicializar este tipo de delitos, priorizando hechos que vulneren los derechos fundamentales de las comunidades que habitan en el territorio, así como aquellos que tengan lugar en territorios colectivos o étnicos. Al igual que la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, esta dirección de la Fiscalía fue creada hace poco tiempo, razón por la cual es difícil medir todavía las acciones realizadas y resultados alcanzados por estas.



Policía Ambiental y Ecológica

Se trata de un cuerpo especializado de la Policía Nacional que se encarga de apoyar a las autoridades ambientales, entes territoriales y a la comunidad en la defensa y protección del medio ambiente y los RNR. Asimismo, ejerce las funciones de control y vigilancia previstas por la ley.

Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación (CONALDEF)

Es una entidad encargada de concretar acciones para detener la deforestación y coordinar la implementación de estrategias de rehabilitación, recuperación y restauración ecológica (Ley 2294 de 2023, artículo 9). Está encargado de proponer políticas, planes y estrategias de lucha contra la deforestación y otros delitos ambientales; coordinar las medidas interinstitucionales para su control; evaluar los avances en la lucha contra la deforestación, y está llamado a formular y ejecutar nuevas estrategias y acciones de rehabilitación, recuperación y restauración ecológica.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

- 1) ¿Quiénes consideran que son los actores que más han incumplido la legislación ambiental colombiana y han explotado el medio ambiente sin tener en cuenta las normas vigentes?
- 2) Ustedes, como comunidades negras, indígenas y campesinas, ¿tienen en cuenta los mecanismos disponibles que guían las condiciones para el aprovechamiento de los recursos naturales en sus territorios? ¿Cómo?



Herramientas para la protección del territorio



Dentro del ordenamiento jurídico del país, líderes y lideresas cuentan con distintas herramientas para la defensa de los territorios en los que se asientan sus comunidades y de los ecosistemas y recursos naturales que en ellos se encuentran. Estas herramientas han sido fundamentales al momento de acompañar procesos sociales y políticos en la apuesta por conservar y cuidar el medio ambiente y los valores culturales con los que se asocia. De este modo, la Consulta Previa o la Acción de Tutela se configuran como herramientas de gran importancia al momento de adelantar acciones de exigibilidad de derechos ambientales y se establecen como vías sociojurídicas que facultan la autodeterminación y el gobierno propio de comunidades étnicas y campesinas en la región.

Si bien la efectividad de estas herramientas está sujeta a controversias y críticas estructurales al funcionamiento del aparato jurídico del país, el conocimiento y apropiación de sus contenidos y mecanismos de aplicación resultan fundamentales para mantener los procesos organizativos y de defensa de derechos. A continuación, se presentan cuatro acciones que contempla el marco jurídico del país y se describen sus principales características:

**La
Consulta
Previa**

**El
Derecho
de
Petición**

**La Acción
de Tutela**

**La Acción
Popular**



La Consulta Previa

¿Qué es la Consulta Previa?



Es un derecho colectivo fundamental que ingresa a nuestro ordenamiento jurídico mediante el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio formula mecanismos para la defensa de los derechos de las comunidades étnicas dentro de los que se encuentra el derecho a opinar y decidir, y la obligación del Estado de consultar de manera previa sobre “la adopción de las medidas legislativas y administrativas que puedan afectar su condición de minorías étnicas” (Montero, 2022, p. 41).

Las obligaciones que el Estado adquiere en materia de consulta previa son:

- Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
- Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente.
- Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Condiciones que deben cumplirse para garantizar el derecho fundamental a la Consulta Previa:

- Carácter previo de la consulta: la consulta debe ser previa a la intervención del territorio o del ambiente de la comunidad. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar deberán pactarse de antemano. Este acto es obligatorio y recibe el nombre de preconsulta. En caso de que ya haya

iniciado el proyecto y no se realizó consulta, se debe iniciar de inmediato un proceso consultivo para determinar reparaciones, restablecimientos y los actos de mitigación que correspondan.

- Protección de las formas de gobierno propio: la consulta se adelanta con los representantes legítimos del pueblo o comunidad concernida, esto como manifestación de respeto a las formas tradicionales de gobierno.
- Proporcionalidad de las medidas de intervención: las decisiones estatales deben estar desprovistas de arbitrariedad. Cada medida de intervención adoptada debe considerar siempre que los efectos que se generan a partir de la intervención no terminen siendo más lesivos que los beneficios que persiguen.
- Estudio de impacto: que la consulta sea informada implica que no pueden adoptarse decisiones sin un conocimiento amplio de sus consecuencias. Por ello, deben realizarse estudios sobre sus impactos ambientales y sociales. Estos estudios deberán efectuarse en cooperación con los pueblos interesados (artículo 7 del convenio).

Proceso de Consulta Previa

Procedencia del procedimiento de consulta previa: la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) debe determinar si hay lugar o no a una **afectación directa**, es decir, que se produzca un impacto positivo o negativo en las condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales de estos colectivos, dentro de los territorios colectivos o en zonas habitualmente habitadas por las comunidades.

Etapas de coordinación y preparación: esta etapa consiste en identificar a las entidades públicas que tienen competencia relacionada con las medidas legislativas, con los actores administrativos o con el proyecto, obra o actividad, que se consultarán para convocar a reunión y conocer sus puntos.

El fin de esta etapa es el diseño de estrategias que faciliten el proceso de consulta previa.

Preconsulta: consiste en un diálogo previo con los representantes de las comunidades étnicas involucradas para definir la ruta metodológica que debe seguir el responsable de la expedición de las medidas legislativas o administrativas, o el ejecutor del proyecto, obras o actividades y los términos en que será realizado el proceso según las especificaciones culturales de cada uno de los colectivos. En esta etapa se debe velar porque las comunidades étnicas conozcan cada una de las implicaciones y aspectos de la propuesta, para que así puedan recibirla, analizarla, discutirla y responderla.

Consulta Previa: Tras estas fases la consulta como tal se lleva a cabo. Tiene como objeto: realizar un diálogo entre las comunidades étnicas, el Estado y el ejecutor con la intención de asegurar la efectiva protección de los intereses colectivos y fundamentales de las comunidades, en concertación con los intereses generales.

Derecho de Petición

¿Qué es un Derecho de Petición?

Es el derecho o facultad de toda persona para presentar solicitudes o peticiones ante las autoridades o entidades del Estado, ya sea por motivos de interés general o particular. Este derecho fue establecido en el artículo 23 de la Constitución Política.

¿Para qué sirve?

El derecho de petición sirve para: solicitar información, pedir que se preste un servicio, reclamar sobre un servicio recibido, quejarse sobre el servidor o funcionario que lo atendió, sugerir mejor calidad en el servicio, entre otros.



¿Cómo se presenta un Derecho de Petición?

El derecho de petición puede ser dirigido de forma escrita o verbal a cualquier entidad pública, empresa privada, asociaciones u organizaciones, o incluso a una persona natural si dicha persona tiene una posición dominante o de autoridad frente a usted. El ciudadano podrá acudir a entidades como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría o a personerías municipales para recibir asesoramiento.

Contenido: a) entidad o personas a quien se dirige la petición; b) nombre suyo o de la persona que presenta la petición; c) identificación de quien realiza la petición (cédula, tarjeta de identidad o pasaporte); d) explicación clara de lo que se pide, solicita o necesita; e) los motivos o razones por las cuales se realiza la petición; f) dirección física o correo electrónico donde se desea recibir respuesta. **Respuesta:** toda entidad está obligada a recibir, informar y responder la petición. Según correspondan en un plazo de entre 5 y 30 días hábiles.

Acción de Tutela

¿Qué es y para qué sirve la Acción de Tutela?

En Colombia todas las personas pueden ejercer la acción de tutela, que es un mecanismo que permite acudir ante autoridades judiciales para “obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o de los particulares” (Personería de Bogotá, SF, p. 4). La acción de tutela es un procedimiento preferente, sencillo e inmediato que sirve para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, por sí mismas o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. El mecanismo de acción de tutela fue dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y fue regulada por el Decreto 2591 de 1991.



Derechos protegidos por la Acción de Tutela

Son protegidos por la acción de tutela todos los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, culto y de expresión, derecho de petición al debido proceso, derecho al trabajo, reunión y manifestación políticas, entre otros. La acción también ampara aquellos derechos que por interpretación constitucional o conexidad⁶ han sido reconocidos como fundamentales, por ejemplo: la dignidad humana, la educación y el derecho a un medio ambiente sano.

¿Cómo se presenta una Acción de Tutela?

La acción de tutela se puede presentar de forma escrita o verbal ante cualquier juez o tribunal del lugar donde ocurrió la violación del derecho a reclamar. Cabe aclarar que todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela y que no se necesita ser abogado para hacerlo.

Contenido: a) identificación del tutelante o reclamante (cédula, tarjeta de identidad o pasaporte); b) los derechos fundamentales que considera vulnerados; c) descripción, relación o enumeración de los hechos o circunstancias que llevaron a la persona a presentar la acción de tutela; d) la solución o pretensiones que se le requieren al juez; e) fundamentos de derecho; f) lugar o forma donde recibirá las notificaciones pertinentes, y manifestar que se hace la solicitud bajo la gravedad del juramento y la firma.

6. La interpretación constitucional pone de presente aquellos derechos que, tras ser revisados, considerados y estudiados por la Corte Constitucional, pueden entenderse como derechos fundamentales, estableciéndose de esta manera en la jurisprudencia. Por otro lado, los derechos amparados vía conexidad son aquellos considerados como fundamentales por su íntima relación con aquellos que se encuentran denominados como tal. Así, la expresión “por conexidad” se utiliza para indicar la relación entre un derecho fundamental y otro que no está dispuesto necesariamente de esta forma en nuestra Constitución. Un ejemplo de esto podría ser: el derecho a un medio ambiente sano (derecho colectivo) en conexidad al derecho a la salud (derecho fundamental).

Una vez presentada la acción de tutela, el juez puede tomar medidas provisionales, que son medidas consideradas necesarias y urgentes para proteger los derechos fundamentales en aras de evitar que la amenaza al derecho se convierta en violación o que la violación del derecho produzca un daño más grave, mientras se emite una resolución de fondo.

La tutela es uno de los mecanismos más eficaces en Colombia, debido a la rápida respuesta que debe emitirse por parte de los juzgados colombianos, en donde obliga a las entidades a cumplir con acciones que garanticen el respeto del derecho o derechos vulnerados.

Acción Popular

¿Qué es una Acción Popular?

Es una acción constitucional que se presenta como mecanismo de protección de derechos colectivos. Se encuentra dispuesta en el artículo 88 de la Constitución Política de 1991.



¿Para qué sirve?

Sirve para evitar el daño, detener el peligro, la amenaza o agravio sobre derechos e intereses colectivos, o, cuando sea posible, para devolver las cosas a su estado anterior, con ocasión a una acción u omisión de una autoridad o un particular.

Derechos protegidos por la Acción Popular

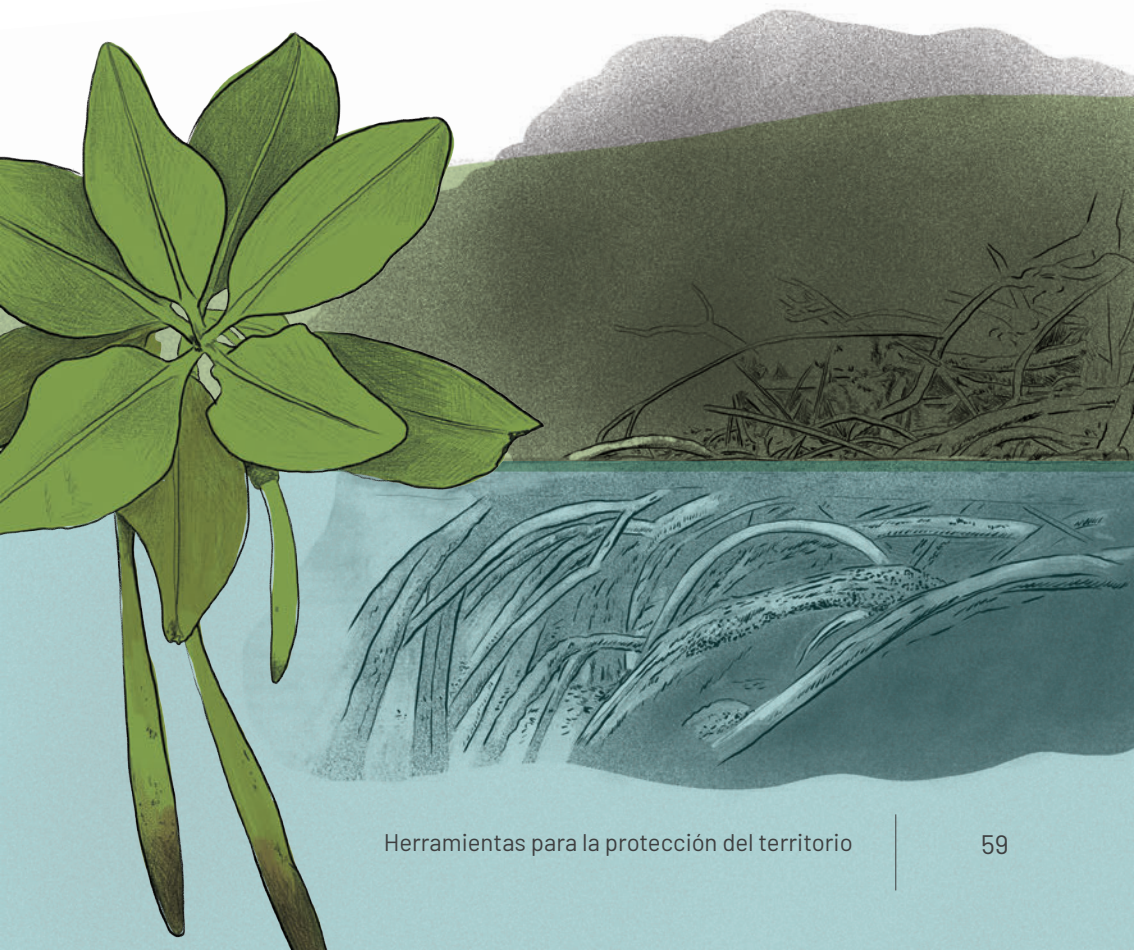
Algunos ejemplos de los derechos amparados por esta medida son: el goce de un ambiente sano; la conservación de las especies animales y vegetales; protección de las áreas de especial importancia ecológica y la preservación



y restauración del ambiente; el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; la defensa del patrimonio público; la seguridad y salubridad pública; el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y la prevención de desastres previsibles técnicamente.

¿Cómo se presenta la Acción Popular?

Toda persona natural o jurídica puede presentar una acción popular, esta debe ser presentada de forma escrita más no se requiere de un abogado para ello. El escrito debe contener los siguientes elementos: a) indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado; b) indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petición; c) la enunciación de las pretensiones, y d) la indicación de la persona natural o jurídica, o la autoridad presuntamente responsable de la amenaza o del agravio.



Protección a líderes y lideresas



El ejercicio de liderazgo es una labor de suma importancia y de gran valor dentro de las comunidades. En particular, mujeres lideresas ejercen un rol fundamental al momento de defender el territorio, la igualdad entre géneros, promover y proteger los derechos de la mujer y sus libertades fundamentales.

El escenario de defensa de derechos en Colombia contiene numerosos retos y complicaciones relacionados con la consumación de múltiples riesgos y la respuesta limitada e ineficiente que ofrece el Estado en varias regiones del país. Para el año 2023, 60 defensores ambientales perdieron la vida, convirtiéndose en el lugar donde más se agrede y violenta a esta población en todo el mundo (Global Witness, 2024). Ya en el mes de junio de 2024, se han reportado 26 amenazas a esta población y el asesinato de 64 líderes y lideresas defensores de derechos (Banco de datos de derechos humanos y violencia política, 2024).

Por este motivo, resulta de gran importancia conocer los mecanismos existentes para proteger a quienes protegen, revisarlos de forma crítica y explorar posibles rutas de autocuidado y autoprotección. A continuación, se exponen algunos elementos clave al momento de pensar las garantías de protección a líderes y lideresas, y se presentan las principales herramientas que existen a nivel institucional para la protección de la población defensora de derechos humanos:



¿Qué es un riesgo y una amenaza?

Se entiende por riesgo toda situación de peligro en que se encuentra expuesta una o varias personas (comunidades y organizaciones) en un momento y lugar determinado, por la presencia de una o varias amenazas, cuyo grado de afectación estará determinado por el nivel de vulnerabilidad y las capacidades o preparación con que se cuente para hacerle frente (Díaz, 2019). El riesgo suele ser clasificado en riesgo ordinario, extraordinario y extremo.

Por otro lado, **las amenazas son** aquellos factores de peligro que implican la posibilidad de sufrir daño o cuyas manifestaciones pueden afectar a una persona o una comunidad en determinado momento y lugar. Las amenazas pueden ser de origen natural o ser generadas por la actividad humana.

Sentencia SU-546 de 2023 y el derecho a defender derechos

En diciembre de 2023 la Corte Constitucional de Colombia se manifestó mediante la Sentencia SU-546 para dar respuesta a un proceso de acción de tutela instaurada por población líder y defensora de derechos humanos contra diversas entidades estatales. Esta sentencia cobra gran importancia por tres motivos fundamentales: la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional (ECI) por la persistente violación de derechos fundamentales a la población líder y defensora, el conjunto de órdenes a diversas entidades estatales para la efectiva protección derechos fundamentales en esta población y por el establecimiento en la jurisprudencia nacional del derecho a defender derechos. A continuación, nos detenemos a revisar estos elementos, manifestando la importancia de hacerles seguimiento, exigirlos y comprender sus alcances como herramienta para proteger a líderes y lideresas:

Declarar el estado de cosas inconstitucional

El ECI es una figura jurídica de decisión que la corte adopta cuando existe una violación masiva y recurrente de los derechos fundamentales donde se requiere de medidas de carácter estructural para poder modificar dicho estado de cosas. En este caso, la corte declara el ECI por la falta de sincronía entre la **persistente, grave y generalizada violación de derechos fundamentales de la población líder y defensora**, por un lado, y la capacidad institucional y presupuestal para asegurar el respeto, garantía y protección de esos derechos (Corte Constitucional, 2023). En otras palabras, existe una gran distancia entre el deber ser del actuar de las entidades estatales en el cumplimiento de sus funciones y las realidades de afectación a los liderazgos.

Derecho a defender derechos

A lo largo de sus distintos apartados, la sentencia es reiterativa en la obligación del Estado colombiano de generar garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos, entendido en el marco de una responsabilidad especial dentro del marco constitucional e internacional de protección a quienes han asumido la vocería de comunidades a efectos de exigir derechos individuales y colectivos. Así, el objetivo de este derecho “consiste en garantizar un ámbito de actuación seguro y libre para que defensores y defensoras reclamen el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos” (Corte Constitucional de Colombia, 2023, parr. 68).

Formulación de órdenes generales a las autoridades

Mediante esta sentencia la corte resuelve ordenarle a la Fiscalía, la UNP, los ministerios y la Defensoría del Pueblo, una serie de acciones y medidas destinadas a mitigar y abordar la situación manifestada en la declaratoria del ECI. Es de destacar que de manera transversal se les ordena a todas las autoridades intervinientes en el proceso de garantías de protección a la

población líder y defensora, que apliquen la perspectiva de género en el ejercicio de sus competencias. A continuación, se expone una tabla con las principales órdenes contempladas en la sentencia según entidad:

Tabla 6. Órdenes contempladas en la Sentencia SU-546 de 2023 a entidades del nivel nacional

ÓRDENES	
	Fiscalía → Adelantar un proceso de análisis y valoración integral de su sistema de trabajo, generando una reingeniería que permita establecer obstáculos e insuficiencias que ralentizan investigaciones y proporcionan el escaso nivel de esclarecimiento de sentencias finales. → Presentar anualmente un informe público en el que se dé cuenta de las estadísticas de esclarecimiento frente a los delitos contra líderes sociales, patrones delictivos, condenas y absoluciones. → Ampliar investigaciones a determinadores y no únicamente a autores materiales.
	Unidad Nacional de Protección → Valorar las rutas de protección colectiva en los municipios de mayor nivel de riesgo (focalización). → Considerar medidas con enfoque diferencial. → La falta de avances en las investigaciones no es razón para desvirtuar una amenaza ni es justificación para retirar esquemas de protección.
	Ministerio del Interior → Darle continuidad a la Mesa Nacional de Garantía y a las Mesas Territoriales asegurando la celeridad de sus procesos, la periodicidad de sus reuniones y la presencia de las autoridades que comprometan directamente al Estado. → Debatir el cumplimiento de las recomendaciones de prevención y reacción rápida. Comisión intersectorial para la Respuesta Rápida a las alertas tempranas. → Diseñar e implementar una estrategia de sistematización y publicidad de todo el sistema normativo vigente relativo a la protección de la población líder y elaborar una “Carta de Derechos para la población líder”.

Ministerios

- Implementación de un sistema informático de comunicación ágil que permita a los ciudadanos notificar la existencia de amenazas o riesgos.
- Crear una base de datos donde se registre la población líder y defensora. Debe haber una unificación de conceptos, tipos de violencia y crear una sola estadística.

Defensoría del Pueblo

- Fortalecer el apoyo a quienes desde las comunidades ejercen actividades de defensa y promoción de derechos y la organización social.

Fuente: elaboración propia con base en documento de la sentencia.

Responsabilidades de gobernaciones y alcaldías en materia de prevención y protección

Mediante el capítulo sexto del Decreto 2252 de 2017 se especificaron los niveles de coordinación entre los gobernadores y alcaldes en lo relacionado con la protección individual y colectiva de líderes y lideresas de organizaciones, y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo. Así, se establecen como primeros respondientes en la detección temprana de situaciones de riesgo y deberán:

- Detectar tempranamente situaciones de riesgo para líderes sociales y defensores de derechos humanos.

DECRETO
2252
DE 2017

- Diseñar y ejecutar acciones para prevenir riesgos en los Consejos de Seguridad Territoriales.
- Crear mecanismos institucionales para evitar que se consuman los riesgos.
- Fortalecer los programas de protección del Estado en sus territorios.
- Desarrollar estrategias para que las comunidades identifiquen y mitiguen riesgos.
- Activar rutas de protección para líderes sociales en riesgo.



**Unidad Nacional
de Protección**



La Unidad Nacional de Protección (UNP)

¿Qué es y qué hace la UNP?

La UNP es un organismo del Estado del orden nacional encargado de la prevención y protección de personas y comunidades en situación de riesgo. Se centra en la prevención urgente y se destina a aquellas personas con un rol de liderazgo, grupos y comunidades que se dedican a actividades públicas a nivel social y política, en defensa de los derechos humanos (Unidad Nacional de Protección, 2023).

Ruta de protección individual y colectiva de la UNP

Si una persona recibe amenazas contra su vida, libertad, integridad o seguridad debe seguir la ruta de protección individual. Si las amenazas son dirigidas a una comunidad,

colectivo o grupo ético deben seguir la ruta de protección colectiva. Los pasos se pueden resumir de la siguiente manera: a) recopilación de documentos o requisitos; b) radicación y revisión de requisitos; c) activación de la ruta de protección; d) análisis y valoración del caso en el Comité de Evaluación de Riesgo (CERREM); e) implementación de medidas de protección, y f) reevaluación del riesgo una vez implementadas las medidas.

- ➔ Puede revisar con mayor detalle los distintos pasos y trámites que componen las rutas de protección de la UNP ingresando a la web de la entidad o dirigiéndose al siguiente enlace: <https://www.unp.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/abc-ruta-de-proteccion/>

La ruta para que puedas ingresar a este link, es:

- 1) Ingresas a la página de la UNP: www.unp.gov.co
- 2) En la parte superior de la página, encuentras la opción Atención y Servicios a la Ciudadanía.
- 3) Allí encuentras una lista de links a los que puedes acceder. Entre esos, está el ABC de la ruta de protección, y el ABC de la ruta de protección colectiva.

Plan Nacional de Garantías

¿Qué es el Plan Nacional de Garantías?

Es un espacio de diálogo entre el Estado colombiano y la sociedad civil orientado a mejorar los distintos mecanismos de protección y defensa de los derechos humanos. Se centra en acordar políticas y estrategias para la construcción y el mantenimiento de garantías de defensa y exigencia de derechos humanos.

¿Cuáles son los objetivos de Plan Nacional de Garantías?

Mediante esta herramienta se busca establecer garantías integrales para la defensa efectiva de los derechos humanos, con una perspectiva inclusiva y de género. En este sentido, se pretende identificar y eliminar riesgos, reducir la vulnerabilidad mediante la acción coordinada del Estado a nivel nacional y local, así como adoptar medidas adecuadas para proteger a personas y colectivos en riesgo e implementar políticas públicas para prevenir la repetición de violaciones contra defensores de derechos humanos.

Mesas de Garantías a nivel nacional y territorial

Bajo el Plan Nacional de Garantías se desarrollan mesas de trabajo nacionales y territoriales. Las primeras son espacios liderados por el Ministerio del Interior, donde representantes de la sociedad civil y de instituciones gubernamentales se reúnen para acordar estrategias y medidas del nivel nacional que den solución a las violaciones a los derechos humanos de quienes trabajan en su defensa. Por otro lado, las mesas territoriales se desarrollan en las regiones y están encaminadas a establecer diálogos territoriales sobre las garantías para que líderes y organizaciones sociales y de derechos humanos puedan ejercer su labor.

Programa Integral de Garantías para Mujeres Líderesas y Defensoras de Derechos Humanos (PIGMLDD)

Es una iniciativa diseñada para la protección y promoción de los derechos de las mujeres que lideran causas sociales y defienden los derechos humanos. Nace de la incidencia de distintos grupos de mujeres ante la Mesa Nacional de Garantías. Allí, las mujeres exigieron la existencia de un programa con enfoque de género que desarrolle un diagnóstico diferenciado sobre la situación de los liderazgos de mujeres, para así establecer estrategias afines que respondan a las

necesidades particulares de las mujeres que desarrollan labores de liderazgo.

El riesgo desde una perspectiva diferenciada

Si bien las lideresas y defensoras afrontan los mismos riesgos que los hombres, existen riesgos adicionales o diferenciados relacionados con el género. Estos encuentran su causa en una serie de ideas o prácticas arraigadas en algunos sectores de la sociedad sobre los roles que debe cumplir cada género. Es decir, la forma como deben comportarse y ser las mujeres, aquello que representan ante la comunidad y lo que pueden o no hacer. Las lideresas suelen cuestionar y luchar contra estos roles de género, lo cual ha generado una serie de violencias sociopolíticas adicionales a la labor misma de liderazgo (Zuluaga y Rodríguez, 2021).

¿Cómo se puede acceder a las mesas territoriales de garantías o al PIGMLDD?

Para acceder a las mesas territoriales de garantías cualquier persona defensora u organización social puede: a) solicitar la activación de la mesa ante la Secretaría Técnica Regional de la Defensoría del Pueblo; b) acudir a una convocatoria del Comité de Apoyo territorial o nacional, coordinado por la Defensoría; c) es posible también realizar peticiones de emergencia ante la Secretaría Técnica para convocar al Comité de Apoyo correspondiente. Adicionalmente, una vez instaurada la mesa, se puede solicitar la implementación del PIGMLDD, el cual también podrá gestionarse con alcaldía, gobernaciones, embajadas u otras organizaciones defensoras.



¡Protégeme! Y viviremos dignamente

Un vistazo a las agendas comunitarias sobre la deforestación, la contaminación y la explotación minera en sus territorios

El presente apartado tiene la intención de exponer el proceso de construcción de agendas territoriales en materia ambiental que líderes y lideresas del Unguía, Riosucio y el Urabá antioqueño elaboraron en un escenario de intercambio de experiencias y conocimientos, sobre los daños e impactos ambientales que tienen lugar en sus territorios, así como de las experiencias y horizontes organizativos para abordarlos. Estas agendas fueron puestas en práctica durante escenarios de diálogo social y de incidencia ante diversas autoridades ambientales y administrativas.

Construcción de las agendas ambientales de Unguía, Riosucio y el Urabá antioqueño

¿Qué es una agenda y cómo podemos utilizarla?

Las agendas son una herramienta para determinar e incidir en escenarios complejos donde confluyen los intereses, posiciones y necesidades de múltiples y variados actores de un sistema social. Las agendas deben ser **co-construidas**, lo cual significa que se requiere de la participación activa de todo el colectivo que la está formulando. Además, deben ser **realizables** y **sostenibles**, esto implica claridad en las pretensiones, factibilidad en las metas y disposición de **adaptabilidad** ante

posibles transformaciones en los escenarios de exigibilidad, incidencia y negociación.

Fases o momentos en la construcción de agendas

Las agendas suelen construirse en tres momentos o fases: diagnóstico, formulación e implementación. En la fase de **diagnóstico** se busca crear o formular formas de comprender, representar y explicar las problemáticas abordadas en la agenda. Luego, se encuentra la fase de **formulación**, donde los líderes y lideresas elaboran los objetivos estratégicos, acciones y actividades, así como propuestas y exigencias específicas para los diferentes componentes. En este punto, resulta crucial asignar un grado de importancia a cada una de las temáticas por abordar. Finalmente, en la fase de **implementación**, se concreta la hoja ruta de negociación, diálogo e incidencia con los actores involucrados, y se comienza a llevar a cabo la implementación de las acciones y actividades planteadas.

Diagnóstico de las comunidades sobre las problemáticas en materia ambiental

Bosques y ríos como bien ambiental protegido: en páginas anteriores, se han presentado los principales daños e impactos ambientales que se han identificado en las tres zonas debido a la configuración de conflictos socioambientales. A continuación, se complementa la descripción de estos, mediante las diferentes aproximaciones que comunidades indígenas, negras y campesinas en Riosucio, Unguía y Urabá plantean sobre el rol que cumplen bosques, ríos y derechos ambientales en su cotidianidad:

¿Por qué es importante hablar de derechos ambientales en la comunidad?

Cuando conocemos nuestros derechos en materia ambiental, podemos garantizar un futuro sostenible, preservar la diversidad y mitigar los daños ambientales y el cambio climático. Además, podemos tener una producción y un trabajo del campo que sea sostenible. Es importante permitir a las comunidades un buen manejo territorial, teniendo en cuenta los cuidados y conociendo las consecuencias que se tienen al no dar un buen uso de este.

¿Qué son los bosques y los ríos?

Para las comunidades indígenas Cuti, Eyákerá, Tanela y Arquía, los ríos y bosques son fuentes de vida y tienen un significado: el río es la sangre que corre; la tierra es el cuerpo, la carne viva, y los bosques son los huesos que sostienen. Sin río, no hay indígenas. Sin bosque, no somos indígenas. En el bosque encontramos árboles grandes y pequeños, donde habita la naturaleza. Ellos nos protegen y cuidan, pues es donde conseguimos medicinas, animales, lugares sagrados y la posibilidad de desarrollar nuestra cultura. Por eso, los indígenas resistimos en el territorio, y cuidamos de nosotros gracias a lo que encontramos en los bosques.

¿Cómo se relaciona la comunidad con los bosques? ¿Hay tala de árboles?

Nosotros creemos que cada piedra, cada árbol o planta está cumpliendo su función. La prioridad de los pueblos indígenas es vivir con salud. El buen vivir. Por eso, poco se piensa en el dinero. Las comunidades indígenas están pensando en la vida de más adelante, pensamos en la visión de la vida y sobre lo que les tocará a nuestros hijos.



EL
BUEN
VIVIR

La tala indiscriminada de algunos que llegan al territorio es la responsable del cambio climático y de que ya no haya animales para comer o plantas para curar. Tenemos árboles nativos que han ido desapareciendo, como el bálsamo, el almendro o el cativo. Ahora ya solo se ve teca, que es una especie no nativa. Tampoco se consiguen animales como la pava o el saíno, es por eso que ahora muchos comen cosas de afuera y eso nos enferma.

Y las comunidades negras, ¿cómo viven la deforestación?

Cuando se tala un árbol, se destruye la vida. Con cada árbol que se corta, se acorta un día de vida para nuestra gente. En los bosques podemos respirar aire puro, son lugares en los que nos refrescamos, porque el calor es menor y allí siempre se encuentra agua para tomar.

Actualmente hay un corte de madera masivo, se está bajando el árbol caracolí, la ceiba, los sandé o el caucho. Los que deforestan llegan con abogados y engañan a las comunidades para explotar recursos en lugares donde la gente vive. Además, la deforestación hace que se dañen los ríos, porque se salen de sus cauces o los troncos generan taponamientos y empalizadas que afectan las aguas.

En el caso de las comunidades campesinas, hablamos de deforestación por varios motivos: desde Apartadó, Chigorodó, Carepa y Turbo encontramos bananeras que han deforestado para el cultivo. El banano y el plátano es lo que más contamina, pero también lo que más produce. Luego está la deforestación por ganadería en muchos puntos, como en Necoclí y sus veredas aledañas. También está la deforestación para sembrar teca y aprovechar la madera, desplazaron personas y luego sembraron esta especie. Los árboles nativos se cortaron y vino la teca, que es una especie que seca todo y luego no se puede sembrar.

Formulación de Acciones

Acciones desarrolladas por las organizaciones étnico-territoriales y campesinas

- Cuidado de ríos y afluentes: se han desarrollado acciones para el mantenimiento de fuentes hídricas, como jornadas de limpieza y destaponamiento de las cuencas de los ríos.
- Recuperación de bosques: acciones de reforestación, recuperación de semillas ancestrales (especies nativas) mediante viveros y restauración de cauces u orillas de ríos mediante reforestación; socializaciones mediante asambleas sobre no vender madera o talar árboles nativos. Se han trabajado con el programa Red "T" contra la deforestación.
- Medidas organizativas internas: formulación del reglamento interno comunitario para el cuidado del medio ambiente; prohibición o regulación de las quemadas destinadas a la adecuación de la tierra para el cultivo; realización de recorridos de vigilancia; mejoramiento en la disposición de residuos y basuras, y participación en capacitaciones ambientales y de desarrollo sostenible.
- Acción colectiva: movilizaciones sociales, protestas pacíficas, denuncias y audiencias públicas; acompañamiento jurídico por parte de organizaciones en la defensa del medio ambiente y presentación de derechos de petición.

Entidades priorizadas para la gestión de acuerdos en materia ambiental

- Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Ministerio de Minas y Energía.
- CODECHOCÓ.
- CORPORURABÁ.
- Secretarías de Agricultura y Medioambiente (SAMA).
- Procuraduría delegada para asuntos ambientales.

Fuente: elaboración propia.

Acciones de exigencia

Son acciones encaminadas a realizar labores de denuncia, solicitud de información (por ejemplo, mediante derechos de petición) y utilización de herramientas jurídicas para la protección o exigibilidad de derechos y garantías para el disfrute de estos.

Tipo de acción	Descripción
Diálogos con entidades del nivel local y nacional	Llevar a cabo diálogos vinculantes en zonas rurales de los municipios donde se evidencien las problemáticas y necesidades ambientales de las comunidades. A estos diálogos, entre otros, se busca invitar a la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente y a las Corporaciones Autónomas Regionales para que se ejerzan acciones de intervención relacionadas con la deforestación.
Movilizaciones y mingas	Ante escenarios donde no sea posible sostener diálogos vinculantes, se plantea realizar movilizaciones o mingas con el propósito de visibilizar y denunciar los impactos ambientales y afectaciones del territorio.
Reuniones internas	Realización de reuniones con los líderes de los consejos menores con el objetivo de trabajar lo que concierne al manejo interno de la gestión ambiental, empoderando y formando las comunidades en esta dimensión. Se trabajarían los temas de contaminación y manejo de basuras, tala y sedimentación de ríos, y el uso de materiales químicos.
Encuentros locales	Se propone la realización de encuentros entre las zonas de Riosucio, Unguía y Urabá, donde líderes y lideresas de los tres lugares convoquen a las entidades estatales responsables de velar y defender los derechos ambientales. Se redactaría un documento donde se plasmen los derechos y normas que acogen a los campesinos y a las organizaciones étnico-territoriales, con el objetivo de tener claridad en la exigencia de cumplimiento de lo pactado en la ley ambiental.

Fuente: elaboración propia.

Acciones de incidencia

Las acciones de incidencia buscan crear redes de contacto y apoyo. Incidir implica interactuar con las agendas de los demás actores involucrados en los temas que han sido seleccionados. Así, la incidencia se plantea como un escenario de diálogo de intereses, necesidades y posiciones relativas al desarrollo ambiental y a la gestión de los conflictos socioambientales. En el marco del proyecto Liderar para Defender: una apuesta por los derechos y el territorio, se realizó una gira de incidencia en la ciudad de Bogotá, donde líderes y lideresas de Unguía, Riosucio y el Urabá se reunieron con diferentes entidades Estatales de nivel nacional para denunciar los daños ambientales y sus impactos comunitarios a razón de los conflictos socioambientales presentes en la región. A continuación, se exponen las principales temáticas abordadas durante este espacio:

ENTIDAD A LA QUE SE SOLICITA

**Ministerio del Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible**



Petición general

Adelantar acciones encaminadas a la restauración de daños ambientales y garantizar la protección de los cuerpos de agua y el acceso al recurso hídrico de los consejos comunitarios y resguardos indígenas del Bajo Atrato, de las comunidades campesinas del Urabá.

Exigencias específicas

Descontaminación de las fuentes hídricas y estudios epidemiológicos y toxicológicos sobre las mismas, desarrollar acciones para controlar el vertimiento de productos químicos por agroindustria (fumigación) a los ríos y reactivación de la mesa interinstitucional con CODECHOCÓ y CORPOURABÁ para continuar con la formulación, consulta previa e implementación del Plan de Manejo Ambiental de la Reserva del Río León.

ENTIDAD A LA QUE SE SOLICITA

Agencia Nacional de Minería



Petición general

Brindar información clara y oportuna sobre los permisos y concesiones mineras que están traslapados con los territorios étnicos o que están afectando a comunidades campesinas del Urabá, así como el seguimiento que desarrollan a las empresas con estas licencias.

Exigencias específicas

Informar sobre la caracterización minera y ambiental de los municipios de Unguía, Carmen del Darién, Riosucio, Apartadó, Arboletes y San Juan de Urabá, principalmente sobre los permisos que están traslapados con territorios colectivos e informar sobre el seguimiento y fiscalización que desarrolla la ANM a estos permisos y concesiones, para que cumplan con todas las normas y procesos conforme a la ley.

ENTIDAD A LA QUE SE SOLICITA

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales



Petición general

Garantizar la participación de las comunidades étnicas y campesinas en el proceso de otorgamiento de licencias ambientales de exploración y explotación de recursos naturales. Se solicita también brindar información acerca de las estrategias de participación de comunidades campesinas en los procesos de otorgamiento de licencias ambientales y el seguimiento a las licencias otorgadas en la región.

ENTIDAD A LA QUE SE SOLICITA

Ministerio de Agricultura y Agencia Nacional de Tierras



Petición general

Garantizar el uso y usufructo de los territorios colectivos de las comunidades negras e indígenas del Bajo Atrato, que fortalezcan las capacidades productivas y resguarden la seguridad alimentaria. Activación del plan de seguridad alimentaria para las comunidades del Urabá antioqueño.

ENTIDAD A LA QUE SE SOLICITA

Ministerio de Minas y Energía



Energía

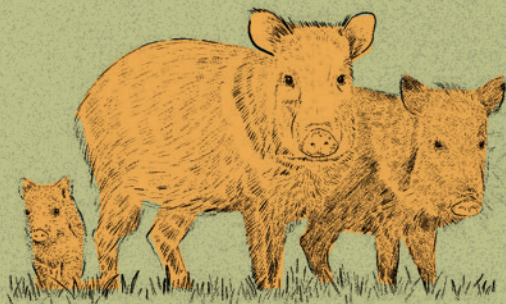
Petición general

reportar las acciones que han desarrollado con las CAR y el Ministerio de Ambiente para hacer frente a los problemas de carácter ambiental relacionados con la minería en Urabá y Bajo Atrato.

Exigencias específicas

generar estrategias de regulación de la minería ilegal, reportar las estrategias que se han utilizado para monitorear el debido cumplimiento de los procesos de consulta previa por título minero y compartir mecanismos de acceso regular a la energía eléctrica en los distintos municipios, así como el acompañamiento en la supervisión de la prestación de este servicio.

Fuente: elaboración propia.



Acciones de comunicación

Plantear estrategias comunicativas resulta de suma importancia en la medida en que facultan la posibilidad de difundir información y socializar las iniciativas de liderazgo. De esta manera, se establecen canales de trasmisión de aprendizajes dentro de la organización o dirigidos a una población focalizada, como pueden ser los y las jóvenes de la comunidad. Las acciones de comunicación planteadas por los líderes y las lideresas fueron:

Tipo de acción comunicativa	Descripción
Radios comunitarias y regionales	Se plantea realizar denuncias públicas mediante cuñas radiales ante emisoras regionales y municipales (como Apartadó Estéreo o Riosucio Estéreo). Las denuncias se realizarían por el espacio mínimo de un mes, en ellas se pretende difundir información y realizar un ejercicio explicativo de las problemáticas ambientales por parte de los líderes y lideresas.
Páginas web en internet	Crear una página web para divulgar la información de las actividades ambientales realizadas. Esta web también contendrá un blog informativo sobre los diferentes procesos organizativos y comunitarios en los tres municipios. Se plantea difundir por diversos medios electrónicos la serie de podcast. Realizar y conformar un grupo de jóvenes comunicadores ambientalistas.
Acciones espirituales y formativas	Hacer ceremonias espirituales de armonización ambiental para recordar nuestra cultura y relación con la naturaleza. Esta acción se acompaña de la realización de murales y vallas ilustrativas en las comunidades y resguardos indígenas.
Redes sociales	Creación de un grupo de WhatsApp de los tres municipios. Este método se requiere para buscar el apoyo inmediato de cualquier emergencia. Creación de un perfil de Instagram y TikTok para la realización de vídeos ilustrativos que sirvan para la enseñanza en las distintas comunidades y transmitir los logros más relevantes de las regiones en materia ecológica.

Fuente: elaboración propia.



PREGUNTAS FINALES:

- 1) ¿Qué diagnóstico hace tu comunidad sobre los daños ambientales que se viven en sus territorios?
- 2) ¿Cómo construirían una agenda estratégica en sus comunidades? ¿Qué objetivos, acciones, estrategias y exigencias tendrían?
- 3) ¿En qué escenarios de incidencia sociopolítica y exigibilidad podrían plantear estas agendas?

Esta cartilla tiene el objetivo de fortalecer los procesos internos de las comunidades negras, indígenas y campesinas que abogan por la protección del territorio y el medio ambiente.

¡Te invitamos a consultarla y utilizarla en los procesos pedagógicos internos de consejos comunitarios, resguardos indígenas y organizaciones campesinas!





Referencias

- Agencia Nacional de Minería. (2015). *Cartilla Minería, preguntas frecuentes*. ANM. https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/cartilla_de_mineria_final.pdf
- Arenas, Hugo. (2020). *Responsabilidad medioambiental del Estado*. Legis Editores S. A.
- Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. (2024). Somos ANLA. <https://www.anla.gov.co/nosotros/institucional/somos-anla>
- Banco de datos de derechos humanos y violencia política. (2024). Dinámicas del exterminio del liderazgo social de base. *Revista Noche Niebla*, (69).
- Cancillería de Colombia. (2024). *Tratados*. <https://www.cancilleria.gov.co/juridicainternacional/tratados>
- Clavijo, Juliana y Jácome, Eliana. (2021). La función ecológica de la propiedad y participación ambiental: dos promesas de la constitución ecológica de 1991. *Revista de Estudios Socio-Jurídicos*, 23(1), 71-98. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.9583>
- Defensores. https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2022/12/manual-proteccion-psd_2019.pdf
- Departamento Nacional de Planeación. (2018). *Lineamientos para la elaboración de planes de Vida*. DNP. <https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/Plan-de-vida-28ene2019.pdf>
- Díaz, Leonardo. (2019). *Un canto para la protección. Manual para la protección a personas defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales en Colombia*. Programa Somos
- Global Atlas of Environmental Justice. (2024). *Mining conflicts in Latin America*. en: <https://ejatlas.org/featured/mining-latam>

- Global Witness. (10 de septiembre de 2024). *Voces silenciadas. La violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente*. Global Witness. <https://www.globalwitness.org/es/missing-voices-es/>
- Indepaz. (2022). *Conflictos Socioambientales en Colombia*. Indepaz. <https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/02/Informe-Conflictos-Socioambientales-en-Colombia-final.pdf>
- Induanalisis laboratorio ambiental. (20 de febrero de 2020). *Emisiones de mercurio en el aire*. https://www.induanalisis.com/publicacion/detalle/emisiones_de_mercurio_en_el_aire__45
- Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI. (27 de diciembre de 2023). *Conflictos Socioambientales de la Amazonia Colombiana. Atlas de Conflictos Socioambientales como herramienta de divulgación*. <https://storymaps.arcgis.com/stories/5ab1912134d74d199270bb3fd410467d>
- Ministerio de Ambiente. (8 de abril de 2024). *La deforestación baja en 2023 y en 2024 enfrenta amenazas*. <https://www.minambiente.gov.co/la-deforestacion-baja-en-2023-y-en-2024-enfrenta-amenazas/>
- Montero, Nelsón. (2022). *La consulta previa en las comunidades étnicas: ¿Realidad o utopía?* Grupo Editorial Ibañez.
- Ospina, Daniel. (22 de noviembre de 2022). *¿Qué implica para Colombia la ratificación del Acuerdo de Escazú?* Legis. <https://www.ambitojuridico.com/noticias/analisis/ambiental-y-agropecuario/que-implica-para-colombia-la-ratificacion-del-acuerdo-de>
- Personería de Bogotá. (s.f.). *ABC de las acciones de Tutela, incidente de desacato e impugnaciones*. https://www.personeriabogota.gov.co/images/libros/ABC_DE_LAS_ACCIONES_DE_TUTELA_DIGITAL-2.pdf
- Procuraduría General de la Nación. (2020). *Manual de competencias*. Procuraduría General de la Nación. <https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/docs/Manual-de-competencia-ver2%283%29.pdf>

- Rodríguez Gloria y Páez, Iván. (2012). *Temas de derecho ambiental: una mirada desde lo público*. Editorial Universidad del Rosario.
- Rodríguez, Gloria y Vargas-Chaves, Iván. (2016). *La prevención en materia ambiental: tendencias actuales*. Editorial Universidad del Rosario.
- Rodríguez, Gloria; Henao, Álvaro y Gómez, Andrés. (2020). *Autorizaciones ambientales. Licencias, permisos y concesiones en la realidad colombiana*. Legis Editores S. A.
- Rodríguez, Manuel. (2023). *Presente y futuro del medio ambiente en Colombia*. Editorial Nomos; Debate.
- Unidad Nacional de Protección. (2023). *Programas de prevención y protección UNP*. Guía. <https://www.unp.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/Cartilla-PPP-con-creditos-y-control-de-cambios-17-agosto-2023.pdf>
- Zuluaga, Camila y Rodríguez, Ana. (2021). Cartilla #7: Programa Integral de Garantías para Mujeres Líderesas y Defensoras de Derechos Humanos. En *Herramientas para la incidencia en la defensa de los derechos humanos en Colombia*. Comisión Colombiana de Juristas. https://www.coljuristas.org/sala_de_prensa/cartilla-7-programa-integral-de-garantias-para-mujeres-lideresas-y-defensoras-de-derechos

Leyes y normas

- Código de Minas [CM]. Ley 685 de 2001. Artículos 10, 14, 122 y 131. 8 de septiembre de 2001 (Colombia).
- Código Penal [CP]. Ley 599 de 2000. Artículos 328, 330, 332, 334 y 336. 24 de julio del 2000. (Colombia).
- Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU.546/23. 9 de mayo de 2024.
- Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Artículo 1, 5, 7 y 8. 4 de marzo de 2018.

- Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 22 de diciembre de 1993. D.O. No. 41146.
- Ley 1333 de 2009. Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. 21 de julio de 2009. D.O. No. 47417.
- Ley 1892 de 2018. Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Minamata sobre el Mercurio”, hecho en Kumamoto (Japón) el 10 de octubre de 2013. Mayo de 2018. D.O No. 50.590.
- Ley 2294 de 2023. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia potencia mundial de la vida”. 19 de mayo de 2023. D.O. No. 52400.
- Decreto 2257 de 2017 [Decreto Reglamentario]. Por el cual se adiciona el Capítulo 6, del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, sobre la labor de gobernadores y alcaldes como agentes del Presidente de la República en relación con la protección individual y colectiva de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comunales, y defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo. 29 de diciembre de 2017.



La guía pedagógica *¡Conozcamos nuestros derechos ambientales!* se terminó de editar en la ciudad de Bogotá, D.C., en el mes de mayo de 2025.

Fue impresa en papel bond de 90 gramos en los talleres de Multi-impresos S.A.S.

Se utilizaron las fuentes Andada Pro y Barlow en la constitución tipográfica de los textos.



